



RESUMEN DE PRENSA

11/07/2024

JUST

Índice

PORTADAS	6
Portada El País - 11/07/2024	7
Portada El Mundo - 11/07/2024	8
Portada La Vanguardia - 11/07/2024	9
Portada ABC - 11/07/2024	10
Portada La Razón - 11/07/2024	11
Portada El Periódico de Catalunya - 11/07/2024	12
Portada Expansión - 11/07/2024	13
Portada El Economista - 11/07/2024	14
Portada Cinco Días - 11/07/2024	15
EDITORIALES DE OPINION, SECTOR	16
Una OTAN más fuerte ante la amenaza al orden democrático El Mundo - 11/07/2024	17
UNION GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES	18
Rescatando a Vodafone: el plan de Zegona para dejar atrás una década de pérdidas y volver a ser competitivos @ ELESANOL.COM - 11/07/2024	19
Ford no aplicará a los trabajadores en 2025 las medidas de flexibilidad del acuerdo de electrificación @ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 10/07/2024	20
Los sindicatos y la AEB siguen sin llegar a un acuerdo sobre el convenio de Banca @ MSN ESPAÑA - 11/07/2024	21
Pepe Álvarez corrige a Garamendi por los “12 días de vacaciones pagadas” con la reducción de jornada: “Según nuestros cálculos, son 16” @ MSN ESPAÑA - 11/07/2024	22
Los trabajadores de la limpieza de Poio convocan huelga desde el día 22 para pedir más salario @ FARO DE VIGO - 11/07/2024	23
Mejorar los sueldos y potenciar la FP, las herramientas para cubrir las más de 9.000 vacantes en el sector tecnológico catalán	24

@ PÚBLICO - 11/07/2024

La Mesa de la Población aborda la implementación del Sello de Garantía y el Observatorio Rural @ ONDA CERO - 11/07/2024	25
La primera alerta por calor obliga a acortar la jornada en el campo @ LA OPINIÓN DE MURCIA - 11/07/2024	26
El CESA aboga por atraer más mano de obra extranjera y talento exterior El Periódico de Aragón - 11/07/2024	27
Crisis entre Junta y rectores por la llegada de la Universidad de Comillas Diario de Sevilla - 11/07/2024	30
Barbón proclama una «nueva era» tras el apoyo unánime al nuevo plan de infraestructuras La Nueva España - 11/07/2024	31
Los salarios por convenio firmados este año recogen alzas del 4% El Economista - 11/07/2024	33
UGT pide a las universidades públicas una «solución» para los centros adscritos La Razón Andalucía - 11/07/2024	34
Concentración en el Hospital de Alcalá: " La falta de personal es alarmante" Alcalá la Real Información - 11/07/2024	35
La patronal del Metal rechaza las propuestas sindicales en el segundo asalto de la negociación La Voz de Cádiz - 11/07/2024	36
UGT corrige a Garamendi: «La reducción es de 16 días, no 12» Sur - 11/07/2024	38
UGT presenta una propuesta para "modernizar el servicio postal en España" Melilla Hoy - 11/07/2024	39
Los sindicatos denuncian que la bolsa de empleo de celadores no se actualiza desde hace seis años El Norte de Castilla - 11/07/2024	40
Los bomberos no cumplen el tiempo de respuesta en el 80% de las salidas, según UGT Hoy Diario de Extremadura - 11/07/2024	41
El sector de las ambulancias iniciará este viernes una huelga indefinida Diario de Ávila - 11/07/2024	42
«Nunca en la historia se ha hecho una reducción general del tiempo de trabajo reduciendo los salarios, es absurdo» El Comercio - 11/07/2024	43
La pujada salarial mitjana pactada en conveni arriba al 2,94% al juny Segre Catala - 11/07/2024	44
Denuncian que Sacyl lleva 6 años sin actualizar la bolsa de celadores Diario de Burgos - 11/07/2024	45
PROTESTA POR OTRO ACCIDENTE LABORAL MORTAL Jaén - 11/07/2024	46
Los sindicatos alcanzan un preacuerdo en FerroGlobe con alza del 8,5% en 3 años La Opinión de A Coruña - 11/07/2024	47
Los trabajadores de la limpieza de Poio convocan huelga desde el día 22 para pedir más salario Faro de Vigo Pontevedra - 11/07/2024	48

LABORAL, SECTOR	49
Ayuso denuncia «estalinismo» contra Nacho Cano La Razón Madrid Viva - 11/07/2024	50
Cinco jueces del TC que rebajan los ERE, bajo la sombra de la incompatibilidad El Mundo - 11/07/2024	52
Rebajar la jornada costará 84.000 euros al año a una empresa media La Razón - 11/07/2024	54
La jornada de 37,5 horas costará 15.000 millones a las empresas ABC - 11/07/2024	55
Yolanda, Sánchez y Garamendi El Periódico de Catalunya - 11/07/2024	56
Díaz se reúne con empresas del Ibex para contrarrestar a Garamendi El Economista - 11/07/2024	57
El reto de aumentar la productividad Cinco Días - 11/07/2024	58
La mayoría de los empleados no consigue desconectar del trabajo en casa La Vanguardia - 11/07/2024	59
La patronal debería entrar en el siglo XXI El Periódico de Catalunya - 11/07/2024	60
La comisaría de los golpes de calor El Mundo - 11/07/2024	61
SEGURIDAD SOCIAL	62
El ingreso mínimo apenas llega al 36% de los potenciales beneficiarios El Mundo - 11/07/2024	63
INMIGRACION Y EMIGRACION	64
Los barones activan cambios tras dar Vox por rotos los pactos El Mundo - 11/07/2024	65
El PP acepta el reparto de 400 menores y exige al Gobierno que declare la crisis migratoria ABC - 11/07/2024	68
Moncloa quiere asumir el reparto de migrantes sin asegurar recursos La Razón - 11/07/2024	71
Un tercer grupo ultra para la UE El Mundo - 11/07/2024	74
Las comunidades aceptan acoger solo a 260 menores migrantes de Canarias La Vanguardia - 11/07/2024	76
Madrid, ante el riesgo de ser una ciudad excluyente El País Segunda Edición - 11/07/2024	78
La dirección de Vox anuncia la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP La Vanguardia - 11/07/2024	79
Israel pide por primera vez la evacuación de la urbe de Gaza	81

PORTADAS



11 Julio, 2024



Fundado en 1976
Año XLIX
Número 17.150

EL PAÍS

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional
2,00 euros
Jueves
11 de julio de 2024

Casa Real



El Rey impulsa la figura de Leonor en los Premios Princesa de Girona —P19

El PP solo acepta un reparto mínimo de los menores llegados a Canarias

Vox reúne a su cúpula para decidir si rompe con los populares

M. MARTÍN / E. G. DE BLAS
Madrid

Las comunidades autónomas que gobierna el PP se comprometieron anoche a asumir la acogida de 347 menores inmigrantes en el marco de un reparto voluntario. La medida resulta insuficiente para resolver la situación de Canarias, que tiene a 6.000 menores acogidos, lo que desborda sus recursos, y aspiraba a trasladar a otras regiones a 3.000. Ceuta también espera un alivio a su saturación. En la Conferencia Sectorial de Infancia reunida en Tenerife, las consejerías populares han seguido una estrategia en bloque: la de desatascar esta acogida puntual y posponer el debate sobre la reforma de la ley de extranjería con la que el Gobierno central y el canario quieren imponer un reparto obligatorio.

Cataluña fue la única autonomía en descolgarse del reparto voluntario. La emergencia sigue sin solución a la vista, a la espera de que la reforma llegue al Congreso, donde el voto de los populares será decisivo. Vox, que había amenazado al PP con romper sus pactos si aceptaba el traslado de menores, reúne hoy a su dirección para estudiar sus pasos. —P14 Y15

Cumbre de la OTAN

Los primeros cazas F-16 donados por los aliados ya están de camino a Ucrania —P2 A 4

Partido Demócrata

Pelosi se suma a la presión y apremia a Biden a decidir ya si es candidato —P5

Los diputados de Podemos, espiados con datos de Interior

La Audiencia recibe pruebas del rastreo masivo, sin aval judicial, de la 'policía patriótica' sobre el partido en 2015 y 2016

JOSÉ MANUEL ROMERO
Madrid

Los 69 diputados de Podemos elegidos en las elecciones de diciembre de 2015 sufrieron un supuesto espionaje ilegal, según las pruebas que han llegado a la Au-

diencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz investiga las maniobras de la denominada *policía patriótica* en el Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP contra sus adversarios políticos. El rastreo masivo que hicie-

ron los agentes, con cientos de consultas en bases de datos policiales entre 2015 y 2016, afectó al menos a 55 parlamentarios de la formación, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero. —P16



Jóvenes deportistas de Rocafonda hacían ayer con las manos el gesto del 304, como Lamine Yamal cuando celebra un gol. GIANLUCA BATTISTA



EURO2024

Rocafonda, el barrio estigmatizado de Mataró donde nació el jugador, se siente reivindicado

Lamine levanta el orgullo del distrito postal 304

IRENE GUEVARA
Mataró

Rocafonda, el barrio de Mataró (Barcelona) que vio crecer a Lamine Yamal, estrella de la Eurocopa a sus 16 años, era un lugar

olvidado y estigmatizado. Lamine lo reivindica orgulloso marcando con las manos el 304, los últimos dígitos del código postal 08304. El símbolo lo repiten los vecinos y se pinta en los muros. —P34 Y 35

Inglaterra, el rival de España en la final —P37



La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor (Winston Churchill)

ELMUNDO

Jueves, 11 de julio de 2024, Año XXXV. Número: 12.621. Edición Madrid. Precio: 2 €



EURO 2024



LAMINE Técnicos de primer nivel se rinden ante su fútbol: «Es un jugador en extinción»

DOMINGO Un gol de Watkins al borde de la prórroga mete a Inglaterra en la final contra España



ABASCAL CONSUMA EL ÓRDAGO CONTRA EL REPARTO DE MENORES

Los barones del PP activan planes para gobernar sin Vox

El partido de Abascal da por «rotos» los pactos de gobierno autonómicos y convoca de urgencia a su dirección

Todas las CCAA 'populares' apoyan el reparto de menores y sólo Cataluña abandona a Sánchez

Extremadura, Castilla y León, Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana ya han previsto los posibles cambios

POR JUANMA LAMET Y MARISA CRUZ Páginas 8 a 10

CAZAS F-16 DE LOS SOCIOS DE LA OTAN PARA PROTEGER A LOS UCRANIANOS

Los pilotos ucranianos podrán volar cazas F-16 en las próximas semanas para defenderse de la brutal agresión rusa. «La primera entrega va de camino desde Dinamarca y Países Bajos y estarán protegiendo los cielos ucranianos este mismo verano», aseguró el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ayer, aprovechando la Cumbre de la OTAN en Washington, cuyo comunicado final fue muy duro contra China por su ayuda a Putin. En la foto, de izda. a dcha., Pedro Sánchez, Keir Starmer, Joe Biden y Jens Stoltenberg.

PRIMER PLANO



MICHAEL REYNOLDS/ EFE



BERNARDO DÍAZ

FORO EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN

Mañeco se planta ante su socio: «No voy a perder mis principios»

Confirma que Castilla y León acogerá a menores migrantes: «No hay nada más patriota que la solidaridad entre CCAA»

«El Gobierno de España juega una vez más a distraer y no cumplir con sus responsabilidades»

POR J. LAMET Págs. 12 y 13

El efecto Madrid llega a Toledo, Guadalajara y Ávila: se dispara el precio de las viviendas

POR MARÍA HERNÁNDEZ Pág. 26

Cinco jueces del TC que rebajan los ERE, bajo la sombra de la incompatibilidad

La ponente de las exoneraciones de altos cargos del PSOE participó en 22 sentencias sobre el caso y fue premiada por gobiernos socialistas

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA Cinco de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han votado a favor de las rebajas de condenas en el caso de los ERE habrían podido incurrir en causa de incompatibilidad por sus vínculos notorios con los altos cargos investigados o por haber participado de alguna manera en diligencias, sentencias judiciales o resoluciones relacionadas con la causa. Se trata de Inmaculada Montalbán, ponente de todas las resoluciones relacionadas con los 12 recursos presentados por los altos cargos condenados en el Supremo en la pieza principal de los ERE; Cándido Conde-Pumpido, presidente del

TC, el ex ministro Juan Carlos Campo, y las magistradas María Luisa Balaguer y María Luisa Segoviano. Todos ellos incurren en algunas de las causas de incompatibilidad que define el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que son aplicables a los miembros del Tribunal Constitucional. Página 14

Advertisement for CONCERT MUSIC FESTIVAL CMF2024 featuring the band MANÁ. Includes logos for Lenovo and Motorola, and mentions the location Chiclana de la Frontera on July 11th.



11 Julio, 2024

LA VANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

JUEVES, 11 DE JULIO DE 2024. NÚMERO 51.318

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

SECUELA POLÍTICA DE LA CRISIS MIGRATORIA

Vox da por rotos los pactos con el PP por el reparto de inmigrantes

Abascal rechaza la distribución de menores migrantes que ha asumido Núñez Feijóo y hoy decidirá su salida de los gobiernos autonómicos

POLÍTICA / P. 7 Y 8



EL RETO DE COMPETIR Y COLABORAR

Los alcaldes de Madrid y Barcelona, José Luis Martínez-Almeida y Jaume Collboni, debatieron ayer invitados por *La Vanguardia*

diario y EY sobre la relación de las dos ciudades. Ambos afirmaron que es compatible que Madrid y Barcelona compitan y, a la

vez, colaboren. El encuentro constató coincidencias en los problemas y diferencias en las soluciones. VIVIR / P. 23, 24 Y EDITORIAL

ALEX GARCIA

La OTAN insta a China a dejar de apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania

Los aliados de la OTAN instaron ayer a China a dejar de apoyar a Rusia en la guerra con Ucrania, mientras consideran irreversible

el ingreso de Kyiv en la organización. La Alianza aboga por tener abierta la comunicación con Moscú. INTERNACIONAL / P. 3

La 'policía patriótica' indagó datos de 55 diputados de Podemos durante dos años

La llamada *policía patriótica* que impulsó el Ministerio del Interior durante el gobierno del PP indagó datos de 55 diputados de Podemos

en el 2015 y el 2016, según una auditoría policial remitida a la Audiencia Nacional tras una querrela del partido morado. POLÍTICA / P. 9

PREMIOS

Leonor reafirma el compromiso "inalterable" con los jóvenes

SOCIEDAD / P. 18 Y 19



EUROCOPA

El golazo de Lamine Yamal deslumbra a todo el mundo

DEPORTES / P. 38 A 40



EUROCOPA

Inglterra será la rival de España en la final del domingo

DEPORTES / P. 41



25.º ANIVERSARIO

Estopa hace historia ante 60.000 personas en Montjuïc

CULTURA / P. 33





11 Julio, 2024

Madrid | 2,00 euros
Año CXXI | Número 39.641

JUEVES
11 DE JULIO
DE 2024

ABC

OPINIÓN
REBECA ARGUDO
Marcó el negro

El PP acepta el reparto de 400 menores y exige al Gobierno que declare la crisis migratoria

Pide más fondos por el colapso de las oficinas de asilo y que se comprometa a contribuir más allá del primer año de acogida, mientras Cataluña se abstiene

EDITORIAL Y PÁGINAS 14-15



Imagen de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada ayer en Santa Cruz de Tenerife

FOTO: RAMÓN DE LA ROCHA / EFE

Vox da por dinamitados los pactos de gobierno con el Partido Popular

Abascal reúne hoy a su dirección para dar una respuesta sobre los Ejecutivos regionales de coalición tras el acuerdo en torno a los jóvenes inmigrantes





11 Julio, 2024

TELEVISIÓN. Arranca el Benidorm Fest 2025 con cambios para la preselección P.54

LA RAZÓN ^{25 años}

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.307 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID



Felipe VI: «Esta generación nos hace confiar en el futuro de nuestro país»

Los Reyes, acompañados por sus hijas, hicieron ayer entrega de los galardones de la Fundación Princesa de Girona P.18-19



GONZALO PÉREZ

El presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, interviene ayer en la sede de este diario

DESAYUNO INFORMATIVO CON... Carlos Mazón

«La España de Sánchez pasará, y tenemos que estar a la altura»

«Decir que hay colapso en los centros de acogida y reclamar recursos no es xenófobo»

«No temo por la estabilidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana»

«Pagamos 200 euros al día por cada menor migrante y el Gobierno solo nos da 150» P.6 a 13

Editorial: Valencia retorna al modelo de éxito del PP P.3

Moncloa quiere asumir el reparto de migrantes sin asegurar recursos

Vox acusa al PP de «romper los pactos de Gobierno» al aceptar la distribución de los 347 menores y convoca hoy a su dirección P.14-15

La UCO analiza en Badajoz el ordenador del hermano de Sánchez en busca de pruebas P.16

La OTAN blinda a Ucrania ante un posible regreso de Trump P.20-21

Mónica García no ha visitado ni un hospital de Madrid en nueve meses P.30-31

EUROc



La España de los récords ya tiene rival: Inglaterra

Los de Bellingham derrotaron a Países Bajos (1-2) Págs. 45 a 50



Director: ALBERT SÁEZ

el45

Precio: 2 €

JUEVES
11 de julio de 2024

Edición digital:
ELPERIODICO.COM



Estopa toca el cielo en Montjuïc

Los hermanos Muñoz desatan el delirio en el Estadi Olímpic ante más de 60.000 fans en su antológico concierto de celebración de 25 años de carrera PERSONAS | P. 34

CONFERENCIA SECTORIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE LA INMIGRACIÓN

Vox da por rotos los pactos con el PP tras el reparto de migrantes

Los populares aceptan la acogida de 400 menores llegados a Canarias y Ceuta pero aplazan la decisión sobre la reforma de ley de extranjería planteada por el Gobierno ● Catalunya se abstiene en la votación

— PANORAMA | P. 6 Y 7 —

ANIVERSARIO

Dagoll Dagom cumple 50 años con un gran espectáculo en el Grec

TEMA DEL DÍA | P. 2 A 5

El independentismo se prepara para blindar el regreso de Puigdemont

Los partidos y entidades diseñan un dispositivo «multitudinario» para evitar una detención

PANORAMA | P. 10

EN EL BON PASTOR

El ecodistrito de la Mercedes se retrasa y pierde a la UVic y Elisava

PERSONAS | P. 26 Y 27

LA NUEVA ESTRELLA

El fútbol mundial se rinde al talento y la genialidad de Lamine Yamal

PERSONAS | P. 41



11 Julio, 2024

carreras

Expansión

Jueves 11 de julio de 2024 | 2€ | Año XXXVIII | nº 11.557 | Segunda Edición

www.expansion.com

ESTE FIN DE SEMANA

Fuera de serie

DIRECTIVOS EN VERANO

Fluidra cumple un ciclo con Rhône



Sam Altman.

OpenAI, un vuelo al éxito con turbulencias

La Justicia belga embarga a España por los impagos de renovables P25

La industria del motor dispara un 35% sus ganancias en España P11

¿Compensa ser 'supercommuter' en el trabajo híbrido? P32

El Gobierno fiscaliza la opa de Brookfield sobre Grifols

Se reserva la posibilidad de vetar o poner condiciones a la operación

La opa del fondo canadiense Brookfield y la familia Grifols sobre el grupo farmacéutico debe contar con la autorización del

Gobierno, que considera a la empresa estratégica. Podría poner condiciones a la operación e incluso vetarla. P3/LALLAVE

El Ejecutivo podría imponer la no exclusión de Bolsa o incluso el control de dividendos

BlackRock y Melqart compran acciones del grupo farmacéutico ante la posible oferta

Santander cambia un tercio de su cúpula en menos de un año

Santander ha remodelado un tercio de su cúpula directiva desde finales del pasado año por la creación de negocios globales y la rotación de perfiles. Una docena de ejecutivos han sido nombrados en este periodo para conformar lo que la presidenta Ana Botín considera que es "el mejor equipo de directivos en la historia de Santander". P13

Así es el nuevo organigrama del banco

Ana Botín, presidenta de Santander, junto a Héctor Grisi, consejero delegado.



J.M. Cadarinas

Hacienda planea un castigo fiscal a pisos turísticos en zonas tensionadas

P22/EDITORIAL

Economía se basa en el Banco de España para oponerse a la fusión BBVA-Sabadell

P15

Talgo y CAF se enfrentan a Alstom en Marruecos

P5/LA LLAVE



Carlos de Palacio y Oriol preside Talgo.

Enagás se dispara en Bolsa tras vender Tallgrass a Blackstone P2 y 4

Por qué hay que vender en Bolsa tras las vacaciones y no antes P21

La vivienda se encarece un 3,2% impulsada por las islas y el litoral P23

MIO.one

IA aplicada a optimizar su negocio

www.mio.one



elEconomista.es

JUEVES, 11 DE JULIO DE 2024

EL DIARIO DE LOS QUE TOMAN DECISIONES

AÑO XVIII. Nº 5.649 EDICIÓN NACIONAL

Precio: 1,90€



JD y Zalando son las únicas del 'retail' con consejo de compra en bolsa PÁG. 22



El Supremo aclarará la tributación en Sucesiones por la renuncia de herencias PÁG. 31

La británica Arriva pujará por la concesión de trenes de cercanías

El Estado sacará a concurso el 3% de los servicios de proximidad antes de 2026

La compañía de movilidad Arriva se sube a la competición abierta con la liberalización del ferrocarril en España.

millones de euros, y reconoce su interés por participar en el proceso de apertura a la competencia de los trenes de Cercanías, Regionales y Media Distancia que a día de hoy opera Renfe.

siderados "obligaciones de servicio público" y como tal, reciben subvención de las administraciones. Aunque el Gobierno se muestra dispuesto a que la operadora bajo su control siga prestando estos servicios

hasta 2033, prorrogando el contrato actual, un 3% de estas rutas han de ser sacadas a concurrencia antes de 1 de enero de 2026 como plan piloto para "ganar experiencia en el diseño del proceso". PÁG. 6

Los jóvenes ya no se hipotecan: tienen solo el 6% del crédito

Los menores de 35 años tenían el 40% en 2002

Los jóvenes ya no se hipotecan. Comprar una casa es para muchos menores de 35 años -y también muchos mayores- una utopía, sobre todo en las grandes ciudades. Solo el 6% del saldo pertenece a este colectivo. PÁG. 12

AMAZON CONVIERTE A ESPAÑA EN SU GRAN POLO ENERGÉTICO

Alcanza el 100% de consumo de energía renovable en el mundo siete años antes de lo previsto y sitúa a nuestro país como su principal suministrador fuera de Estados Unidos. PÁG. 9



Enagas sale de EEUU al vender Tallgrass y sube más de un 6%

PÁG. 8

Melqart y BlackRock se refuerzan en el capital de Grifols

Los fondos han notificado nuevas participaciones

Melqart y BlackRock, dos fondos con gran exposición a las empresas del Ibex y con acciones significativas en Grifols, notificaron a la CNMV la compra de nuevas participaciones. PÁG. 10

Illa propone extender el consorcio tributario a todas las autonomías

El PSC busca el apoyo de ERC para la investidura de su presidente

Las conversaciones entre PSC y ERC para reformar el modelo de financiación de Cataluña y, con ello, garantizar la investidura de Salvador Illa, han entrado en una fase crítica. Fuentes conocedoras de las negociaciones subrayan los avances

cosechados en los últimos días, aunque todavía no dan por cerrado ningún acuerdo. Mientras los socialistas circunscriben su propuesta de mejora al consorcio tributario recogido en el Estatuto y avalado por el Tribunal Constitucional, los re-

publicanos intentan llevar más allá el cambio de modelo poniendo como ejemplo el cupo vasco. Lo que une a ambas formaciones es la conciencia de que sin una actualización de la financiación no podrá cerrarse ningún pacto. PÁG. 25

Wall Street se distancia de Europa y ofrece 10 puntos más de rentabilidad en 2024

Se trata de la mayor brecha de todo el ejercicio

La subida que acumula el S&P 500 en el año supera el 17%, frente al 7% que se anota el Stoxx 600 en el mismo periodo, lo que supone la distancia más grande entre ambas bolsas desde el inicio de 2024. PÁG. 19

EVOLUCIÓN EN BOLSA EN EL AÑO, BASE 100



OHLA se arma con Houlihan para negociar con los bonistas

Los Amodio aún negocian con José Elias mientras la vía Altílan se diluye PÁG. 11



Bélgica embarga a España los pagos de Eurocontrol

La justicia destinará los 32 millones a pagar los laudos de las renovables PÁG. 11



La oferta de alquiler cae más de un tercio en un año

La demanda de casas crece a un ritmo "pocas veces visto" que supera el 20% PÁG. 30





11 Julio, 2024

Jueves, 11 de julio de 2024 | Año XLVII | Número 13.501

1,80€



Ayudas

La Airef insiste en que el IMV se conceda de oficio

—P22. Editorial P2

Inversión

Los fondos estrella de 2023 se apagan

—P14

Mercados

Bajadas de tipos a la vista tras el paso de Powell por el Congreso

—P16



CincoDías

www.cincodias.com

Iberdrola y Endesa llevan al Supremo la nueva tasa de los residuos nucleares

Energía. Defienden que la tarifa supera en un 30% lo acordado en 2019 para el cierre del parque

Residuos. Los almacenes descentralizados implican mayores costes que el anulado ATC —P3



Enagás sale de EE UU al vender por 1.000 millones el 30% de Tallgrass —P4



Instalaciones de Grifols en Barcelona. G. B.

Brookfield accede a los libros de Grifols tres días después

Opa. Acuerda la 'due diligence' para poder establecer el precio de la oferta —P5

Inditex, H&M y Shein invierten en startups para ser más verdes —P11

¿Hasta qué punto se benefician las empresas de estar en el Ibex 35? —P15

19 exlíderes mundiales piden un impuesto global a los ultrarricos

Políticos. Zapatero, González, Bachelet, Papandreu o Villepin apoyan la propuesta de Gabriel Zucman

Fiscalidad. El plan se aplicaría a 3.000 personas para recaudar 230.000 millones en el mundo —P24



Michelle Bachelet.

Anfac: "La relación con el Gobierno es excepcionalmente buena" —P9

Montero, abierta a gravar el alquiler turístico en zonas tensionadas —P23

Comsa anticipa dos años la devolución de la deuda bancaria —P6

La CNMC insta a romper el monopolio de Renfe en Cercanías —P8

EDITORIALES DE OPINION, SECTOR



11 Julio, 2024

Una OTAN más fuerte ante la amenaza al orden democrático

LA CUMBRE que esta semana reúne en Washington a los 32 Estados miembros de la OTAN reviste un simbolismo especial. El encuentro tiene lugar allí donde hace 75 años los 12 países fundadores se unieron para armar una alianza defensiva contra la amenaza al orden democrático que suponía la URSS. Hoy esa amenaza la representa la Rusia de Vladimir Putin, y ha sido su agresión sobre suelo europeo lo que ha reavivado a aquella OTAN que en 2019 Emmanuel Macron situó en «muerte cerebral».

Poco después del salvaje ataque ruso a un hospital infantil en Kiev, la Alianza Atlántica inició su encuentro con Joe Biden como anfitrión, y con la necesidad de lanzar un mensaje contundente contra Putin. Si bien no está previsto un acuerdo para la adhesión de Ucrania, la OTAN sí promete un «apoyo sostenido» con asesores civiles, armas y dinero a Volodimir Zelenski. Sin embargo, ello solo será posible si los países europeos cumplen al menos con la promesa de destinar el 2% de su PIB al gasto en defensa. El potencial regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace aún más necesario que la UE, históricamente dependiente de la superpotencia estadounidense, se vuelque en su autonomía defensiva. De hecho, la futura Alta Representante europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ya plantea que ese 2% no puede ser el techo, sino el punto de partida.

España tiene aquí una inmensa tarea pendiente, pues es el país de la OTAN que menos invierte en defensa (1,28%). El Gobierno de Sánchez ha aumentado estas partidas en los últimos años,

pero es insuficiente. Además, no contar con presupuestos este año impedirá incrementar el gasto, un objetivo en el que PSOE y PP coinciden. Incumplir los compromisos internacionales es una de las consecuencias de la incapacidad de gobernar en la que el presidente está instalado por decisión propia.

Los desafíos a los que se enfrenta la Alianza son numerosos. Más allá de Rusia, la rivalidad de China –junto a Irán, aliada de Putin–, el auge de los extremismos en Europa y la incertidumbre política en EEUU ante las elecciones de noviembre –con Biden muy debilitado y el populista Trump, reacio al multilateralismo, encabezando los sondeos– marcan el inicio del mandato de Mark Rutte como secretario general. Por otro lado, el flanco sur tiene un interés primordial

Europa, siempre dependiente de EEUU, está obligada a volcarse en su autonomía defensiva frente al expansionismo ruso

para España y para el resto de los países mediterráneos. Como ayer subrayó Sánchez ante la prensa cuando entraba en la cumbre, una mayor implicación de la Alianza resulta fundamental para la lucha contra las mafias que favorecen la inmigración irregular en el norte de África.

Solo una OTAN unida y global podrá hacer frente a tantas convulsiones para asegurar la paz y la estabilidad de los países que –hoy con serias dudas en el caso de Hungría y Turquía– comparemos los valores de la democracia y la libertad.

UNION GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES



Rescatando a Vodafone: el plan de Zegona para dejar atrás una década de pérdidas y volver a ser competitivos



.. este plazo de tiempo ha visto como se destruían más de 20.000 empleos. Concentración de los sindicatos STC, CCOO y UGT ante la sede del Ministerio para la Transformación Digital por el ERE en Vodafone España. STC

Desde la dirección ..



Ford no aplicará a los trabajadores en 2025 las medidas de flexibilidad del acuerdo de electrificación



.. de verano se activarán los planes de desarrollo de carrera E. R. / EP

La dirección de Ford y el sindicato UGT han acordado que en 2025 no entrará en vigor ninguna de las medidas de flexibilidad pactadas en el Acuerdo para la ..



Los sindicatos y la AEB siguen sin llegar a un acuerdo sobre el convenio de Banca

.. de Banca han llegado a un nuevo impasse, sin que las partes hayan logrado llegar a un acuerdo. Tanto los sindicatos UGT como FINE han denunciado la insuficiente propuesta salarial realizada por la Asociación Española de Banca (AEB), la ..



Pepe Álvarez corrige a Garamendi por los “12 días de vacaciones pagadas” con la reducción de jornada: “Según nuestros cálculos, son 16”

.. de la jornada laboral “equivale a regalar 12 días de vacaciones pagadas por la empresa”. Y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, le ha corregido este miércoles. “Según nuestros cálculos, para las personas que tengan 40 horas ..



Los trabajadores de la limpieza de Poio convocan huelga desde el día 22 para pedir más salario

.. próximo lunes 22 de julio. Esta decisión, según informó ayer el responsable de la federación de servicios a la comunidad de UGT, Carlos Corredoira, se ha adoptado por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, que permanece sin ..

FARO DE VIGO **170** AÑOS
HIZO COMERCIO
SIEMPRE



Mejorar los sueldos y potenciar la FP, las herramientas para cubrir las más de 9.000 vacantes en el sector tecnológico catalán

.. captación de recursos humanos

Con el objetivo de corregir el déficit de puestos sin cubrir, el responsable de FP de UGT Catalunya, Jesús Martín , insiste en que las empresas y las administraciones apuesten por la Formación Profesional. "Con ..



La Mesa de la Población aborda la implementación del Sello de Garantía y el Observatorio Rural



.. el Ejecutivo extremeño, y el segundo está integrado por responsables del Ejecutivo regional, las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, FEMPEX, Consejo Económico y Social, REDEX, UEX, Consejo de la Juventud, CREEX, CCOO y UGT.



La primera alerta por calor obliga a acortar la jornada en el campo



.. las horas perdidas se recuperan después en el mes de septiembre».

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Encarna del Baño, reiteró los llamamientos a las empresas y a la Administración que el sindicato ha realizado en los ..



INFORME SOBRE 2023

El CESA aboga por atraer más mano de obra extranjera y talento exterior

Cree que puede frenarse la pujanza de Aragón y el crecimiento de su PIB

PÁGINAS 6 Y 7 _____



11 Julio, 2024

LOS DESAFÍOS DE LA COMUNIDAD

Aragón debe atraer más trabajadores migrantes para no lastrar su pujanza

El Consejo Económico y Social de Aragón aboga por favorecer la llegada de extranjeros y atraer talento de otras comunidades para cubrir los empleos de los proyectos de inversión y los sectores en expansión

JORGE HERAS PASTOR
Zaragoza

Aragón debe favorecer la llegada de trabajadores extranjeros para evitar que se vean lastradas las buenas perspectivas de crecimiento de que goza la comunidad autónoma, con múltiples proyectos de inversión y sectores en expansión que requieren un elevado volumen de mano de obra. Así lo constata el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), que pide además «reforzar los instrumentos de acogida e integración en el mercado laboral» de quienes vengan de otros países, especialmente si no forman parte de la Unión Europea. Aboga también por la necesidad de «hacer atractivo» el territorio para atraer a población de otras regiones.

Es una de las recomendaciones que destacan en el documento aprobado por consenso en el pleno de este órgano consultivo, formado a partes iguales por representantes de las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme), sindicales (UGT y CCOO) y del Ejecutivo autonómico y cuya finalidad primordial es asesorar a la DGA y a las Cortes de Aragón en cuestiones sociales, económicas y laborales. El escrito, titulado *De la realidad del presente a los retos del futuro*, recoge reflexiones y propuestas con el fin de contribuir al desarrollo económico y el progreso social en Aragón.

«La inmigración es necesaria para cubrir muchos puestos de trabajo del presente y del futuro», reiteró ayer Juan García Blasco, presidente del CESA, junto a la presidenta de la Comisión de Economía del consejo, Ana Yetano, durante la presentación del documento, que este año acompaña como novedad al informe anual elaborado por este órgano sobre la situación de Aragón en 2023.

«El CESA dice lo que debe decir, y con precisión y claridad», subrayó preguntado por la visión sobre los migrantes que tiene Vox, socio de Gobierno en Aragón del PP, al tiempo que hizo hincapié en que la necesidad de trabajadores de otros países lo constatan tanto organi-



El pleno del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), formada por la DGA, los sindicatos y los empresarios, en la reunión celebrada ayer.

Basilio Paraíso Conclusiones de la cumbre del G7

La Fundación Basilio Paraíso, dependiente de la Cámara de Zaragoza, ha lanzado una publicación sobre las conclusiones de la cumbre del G7. El artículo, titulado *Nuevos rumbos de las naciones más industrializadas del mundo*, aparece en el segundo Crónicas Paraíso, que edita la entidad, y ha sido realizado por Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco y patrono de honor de la fundación.

zaciones empresariales como sindicales.

Entre los desafíos a los que se enfrenta la comunidad, el CESA incide en el «desequilibrio» entre la demanda y la oferta de empleo, teniendo en cuenta que hay 50.000 personas paradas en Aragón y que muchos trabajos, tanto los muy cualificados como los de menor nivel formativo, se quedan sin cubrir. Este déficit podría «llegar a frustrar» iniciativas de crecimiento o alguna implantación empresarial, advierten desde el consejo.

El también catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza consideró necesario ahondar en las causas del problema y buscar medidas para mitigarlo, una línea en la que trabaja el Inaem (Instituto Aragonés de Empleo), que está llevando a cabo un «análisis estructural» de la población desempleada.

A pesar de ello, el CESA considera que las perspectivas de Aragón son positivas tras crecer un 2,7%, muy por encima de la media europea (0,4%) y dos décimas por encima de la española. Una pujanza auspiciada por el incremento de la población, la fortaleza del mercado laboral, el crecimiento de las exportaciones y la moderación de la inflación. La relajación de los precios ha supuesto, apuntó Yetano, un «cierto salvavidas» para las familias.

«La economía parece que va en la buena dirección», sentenció el presidente del CESA. El optimismo se mantiene para este 2024 «desde todos los puntos de vista» y la comunidad puede aspirar al pleno empleo a medio y largo plazo, apuntó Yetano. Eso sí, siempre con «cautelos» por las incertidumbres que persisten en el ámbito geopolítico, las políticas monetarias y

cierto agotamiento del impulso postpandemia.

En el ámbito laboral, 2023 fue el tercer año de crecimiento consecutivo de la ocupación, tras la pandemia: creció el empleo (2,2%) y bajó el paro (-10,9%) hasta marcar la tercera tasa más baja entre las comunidades. La buena marcha del empleo y los efectos de la nueva regulación laboral, fruto del diálogo social, han mejorado su estabilidad, ya que tanto temporalidad como parcialidad han descendido, según destacan desde el CESA. También mejoran los datos de empleo de la población joven (22,3% de paro), aunque todavía siguen lejos de la media europea.

Por sectores económicos, el más dinámico fue con diferencia la industria manufacturera (5,6%); el sector servicios (2,7%) y el de la construcción (1,6%) ralentizaron su crecimiento anterior, mientras

El Periódico



Las cifras

2,7%

Aragón creció un 2,7% en 2023, por encima de la UE (0,4%) y de la media España (2,5%)

39.947

La renta media de los hogares en Aragón se ha situado en los 39.947 euros en 2023, con un aumento interanual del 4,8% (1.838 más).

20,4%

El 20,4% de los aragoneses sufre riesgo de pobreza o exclusión, la cuarta tasa más baja del país

el sector de agricultura y ganadería continuó su descenso (-2,7%). Tanto importaciones (26,2%) como exportaciones (7,3%) alcanzaron valores históricos.

Menos desigualdad

En el ámbito social, Aragón mantiene una calidad de vida por encima de la media nacional. De hecho, es la cuarta comunidad con menor vulnerabilidad social y presenta un índice de desigualdad muy inferior a la media nacional. No obstante, la subida de precios repercutió desfavorablemente en la situación de los hogares, que afrontaron mayores dificultades que en 2022.

Durante 2023 creció la población aragonesa, gracias a la llegada de población extranjera, atraída por las expectativas de empleo; se amplió la tasa de cobertura del desempleo; se incrementó el esfuerzo necesario para adquirir la primera vivienda; continuó ampliándose el nivel medio de formación de los aragoneses y reduciéndose el número de jóvenes que no estudian ni trabajan; descendió el grado de satisfacción con el sistema sanitario; y se redujeron la emisión de gases de efecto invernadero del sector regulado y la superficie forestal quemada por incendios. ■



11 Julio, 2024

Crisis entre Junta y rectores por la llegada de la Universidad de Comillas



El centro de Enfermería de San Juan de Dios en Bormujos.

JOSE ÁNGEL GARCÍA

● Los títulos del centro de San Juan de Dios se adscriben el próximo curso a la institución pontificia

Diego J. Geniz

Enésima crisis entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas por la llegada de entidades privadas a la educación superior. El último capítulo lo protagoniza la adscripción del centro de Enfermería de San Juan de Dios (SJD), en Bormujos, a la Universidad Pontificia de Comillas, motivo por el que los rectores y la administración autonómica se han ensarzado en un cruce de reproches. Desde las instituciones académicas se acusa al Ejecutivo de Juanma Moreno de "privatizar" el sistema universitario andaluz, mientras que la consejería competente, comandada por José Carlos Gómez Villamandos, culpa a las universidades públicas de no haber respondido a su oferta para cerrar un acuerdo con dicha escuela. Lo cierto es que nada impide que la

Universidad de Comillas tenga en el Aljarafe sevillano un centro adscrito, al ser una institución estatal por los acuerdos con la Santa Sede. De hecho, sus títulos los acredita directamente la Agencia Nacional de Calidad (Aneca).

Para entender el origen de esta polémica hay que remontarse al otoño de 2022, cuando la orden de SJD comunicó que, tras 15 años, había decidido que su centro de Enfermería en Bormujos dejara de estar adscrito a la Universidad de Sevilla (US) para el curso 2023/24. El trámite para firmar un acuerdo con otra institución académica no llegó a buen puerto, motivo por el cual dio marcha atrás, momento en el que la US le ofreció un nuevo convenio de adscripción que la compañía religiosa rechazó. Tras acordar el consejo de gobierno de la Hispalense no renovar la relación el pasado curso, la Junta mantuvo dicho vínculo en la oferta que envió a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU). El asunto acabó en la Audiencia Nacional, que falló a favor de la decisión de la consejería.

La polémica se ha reavivado recientemente al comunicar la orden de San Juan de Dios que sus estudios de Enfermería estarán vinculados al curso 2024/25 con

UGT: "Las universidades públicas deben asumir esa función"

UGT y CCOO también se han sumado a la polémica por la llegada de la Universidad de Comillas a la provincia de Sevilla. Ambos sindicatos alertaron ayer de la "privatización" del sistema universitario andaluz desde que gobierna el PP. Aunque por parte de UGT también se hizo una llamada de atención por la situación vivida desde que el centro de Enfermería de SJD anunció su des-

vinculación de la US. "Si hay necesidad de que un hospital cuente con centros adscritos para ofrecer titulaciones, deben ser las universidades públicas andaluzas las que asuman esa función y, si existe algún conflicto, lo que hay es que buscar soluciones a esos problemas y no facilitar la entrada de universidades privadas sin pasar los controles legales exigibles".

la Universidad Pontificia de Comillas, lo que supone, a la postre, la entrada de otra institución privada en la educación superior sevillana. Una novedad que no ha sentado nada bien a los responsables de las universidades públicas. El primero en encender la mecha fue el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, quien advirtió hace escasos días en *Radio Sevilla* que "existe un centro privado fuera de Andalucía que está ofertando plazas en su campus andaluz sin conocimiento de la Consejería de Universidad". La indirecta la respon-

dió la misma orden de SJD, que en un comunicado tranquilizaba a los futuros alumnos de su centro, al aclarar que los estudios adscritos a Comillas se encuentran en proceso de aprobación por la Aneca.

El revuelo no se queda ahí, ya que el pasado lunes la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) alertó en un comunicado de la "privatización exprés" del sistema universitario andaluz, al haber aceptado la consejería la adscripción del centro de SJD a Comillas, a modo de "franquicia" de una institución

académica "con sede en Madrid". "En dos años se ha pasado en la comunidad autónoma de una a cinco universidades privadas", recordaban los diez rectores firmantes.

Tales palabras tuvieron respuesta un día después en otro comunicado, en este caso por parte de la Consejería de Universidad, que acusa a los rectores de desear "el cierre" del mencionado centro de SJD al no haber aceptado la oferta para que se adscribiera a alguna de las universidades públicas andaluzas. Ramón Herrera, secretario general de Universidades, las hizo responsables de "poner en riesgo el trabajo de más de 50 familias, el futuro de los alumnos que cursan el grado de Enfermería y la pérdida de 60 plazas anuales de esa titulación". Un duro reproche en el que se recordaba que, tras el desacuerdo con la US, se le ofreció la adscripción a la Universidad Pablo de Olavide (UPO), "que la rechazó".

Precisamente, el rector de la Olavide y presidente de la AUPA, Francisco Oliva, respondió ayer a dichas acusaciones. Lo hizo ne-

La Pontificia de Comillas, como la UNED, es una universidad de carácter estatal

gando que los rectores a los que representa hayan deseado el cierre del centro de la orden religiosa. "Estas palabras distan mucho de la realidad", aseguró Oliva. "Si tan loables fueran las intenciones de la Junta, esta cuestión se hubiera hecho pública en el mes de marzo, cuando Comillas formalizó su solicitud, o en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado el 22 de mayo en Córdoba, donde los rectores preguntamos explícitamente por esta cuestión y se negó la mayor en la propia sesión del órgano consultivo", abundó.

Para Francisco Oliva, la consejería que dirige Villamandos podría haber "intervenido" para que la adscripción del centro de SJD se realizase con alguna universidad privada ya asentada en Andalucía.

Lo cierto es que, como recuerda la consejería, la política seguida es no autorizar centros adscritos a otras comunidades autónomas, excepción de la que, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), implantada hace años en Sevilla, se salva Comillas, al estar reconocida como estatal por los acuerdos entre la Iglesia y la Santa Sede. Ello la exonera de que sus títulos tengan que acreditarlos antes la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), ya que lo que hace directamente la Aneca. Por tanto, esta oferta académica queda libre del control parlamentario andaluz. Puede salir adelante con el visto bueno del consejo de gobierno de la Junta.



11 Julio, 2024

El impulso al Corredor Atlántico y a las cercanías logra una inédita unión de los líderes asturianos

Partidos, sindicatos, empresarios y colectivos de la sociedad civil suscriben un documento con las prioridades de la región: «Empieza una nueva era en las comunicaciones», proclama Barbón

Página 20



En la imagen, los firmantes del documento de la Alianza por las Infraestructuras. En la fila delantera, de izquierda a derecha, José Carlos del Reguero (USO), Eustasio del Reguero Jiménez (Sindicato de Maquinistas), Diego Sánchez (CGT), José Manuel Zapico, Javier Lanero, Daniel González, Félix Baragaño, Carlos Paniceres, María Calvo, Nieves Roqueñi, Adrián Barbón, Alejandro Calvo, Jorge García, Arantza Fernández, Dolores Carcedo, Delia Campomanes, Adrián Pumares, Javier Jové y Álvaro Queipo. En la fila trasera, en el mismo orden, Alejandro García (Cesintra), Francisco Manuel Fernández Cuervo-Arango (Astra), Patricia Díez, (Asturiana de Viajeros Pequeña y Mediana Empresa de Transporte), Ana Belén Barredo (Corporación Asturiana del Transporte), Ovidio de la Roca (Asetra), Dacio Alonso (UCE), Carlos García Alcalde (Asturias al tren) y Covadonga Tomé, ayer en Oviedo. | Juan Plaza

Barbón proclama una «nueva era» tras el apoyo unánime al nuevo plan de infraestructuras

Los grupos de la Junta, empresarios, sindicatos y miembros de la sociedad civil piden avances en el Corredor y una apuesta por las cercanías

Xuan Fernández Ovidio

«Estamos inaugurando una nueva era en las comunicaciones de Asturias». Con esa frase, presidiendo una gran mesa con los principales actores políticos, empresariales y sociales de la región, describió ayer Adrián Barbón, presidente del Principado, la firma conjunta del «Documento de prioridades de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita», un texto que avalaron todos los representantes implicados.

Los grupos políticos de la Junta, de izquierda a derecha, se pusieron de acuerdo para firmar este documento, así como la FADE, las Cámaras de Comercio, los transportistas y diversas asociaciones del tejido civil.

El escrito, rubricado en el Palacio de los Condes de Toreno (Oviedo), es un resumen de las prioridades que demanda la región en materia de infraestructuras y el Gobierno regional ve como una victoria haberlo sacado adelante con el apoyo unánime de los 26 participantes. El anterior documento se había firmado en 2017 y entre los grupos políticos solo obtuvo el apoyo del PSOE e IU, por lo que es la primera vez en la

historia que una hoja de ruta goza de este respaldo. «En estos meses ha habido problemas, tropiezos, tensiones, pero el cambio es evidente», indicó Barbón, que intervino tras el protocolo de la firma.

El nivel de satisfacción del Gobierno no era el mismo en los partidos de la oposición, que recalcaron que el «documento no es perfecto, y es de mínimos», aunque en general también tildaron la jornada de «clave» para la región.

Lo que firmaron todos los actores deja claras las demandas de la región, más de cincuenta, y destaca la apuesta por el Corredor Atlántico, el desarrollo de la Zalia y el impulso en las Cercanías, pidiéndole al Gobierno central que cumpla lo prometido.

Una vez que la alta velocidad ya es una realidad, con seis frecuencias al día a partir del 21 de julio y la Variante operando a pleno rendimiento, hay unanimidad en que es necesario darle una vuelta a la antigua Feve, estando pendiente la llegada de los nuevos trenes y de la renovación del trazado. El documento también deja algunos puntos importantes. En materia ferroviaria, todos los agentes avalan la petición de que el primer y el último AVE de la jornada pare también en las Cuen-

DOCUMENTO DE PRIORIDADES • Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita

CORREDOR ATLÁNTICO

Se pide un cronograma de las actuaciones, garantizando la dotación presupuestaria. Algunas de las actuaciones:



- Nudo de Villabona
- Acondicionamiento tramo Serín-Gijón: tercera vía de mercancías, renovación vía con traviesa polivalente / triple hilo y conexiones ferroviarias con la Zalia
- Acceso al puerto de El Musel
- Inclusión de la Zalia como nodo logístico de la Red Básica

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

CERCANÍAS: Se pide un cronograma de las actuaciones, garantizando la dotación presupuestaria. Algunas de las actuaciones:



- Renovación total del envejecido y deteriorado material de Renfe
- Ejecución de las actuaciones recogidas en el plan de infraestructuras ferroviarias del 15 de febrero de 2024
- Cumplimiento del compromiso en los Acuerdos de la Castellana
- Servicios exprés con paradas en las principales estaciones de las cabeceras de comarca de los diferentes municipios que faciliten los desplazamientos, especialmente en aquellas franjas horarias en las que se realiza la movilidad obligada por motivos laborales, educativos o asistenciales
- Plan de vías de Gijón, estación intermodal y penetración ferroviaria
- Soterramiento de Langreo
- Supresión de la barrera ferroviaria de Avilés

CARRETERAS



- Inicio de los trámites para la anulación de la prórroga del peaje del Huerna
- Mantenimiento del compromiso en las autovías del Suroccidente

MULTIMODALIDAD PORTUARIA



- Nuevo proyecto de acceso soterrado del vial de Jove
- Accesos al puerto de Avilés

cas, una solicitud de los sindicatos y que ha recogido el Principado.

Según concretó antes de la reunión Alejandro Calvo, no tendría que conllevar la pérdida de tiempo en el trayecto, puesto que podría suprimirse alguna parada en Palencia. La Alianza, a su vez, insta al Gobierno central a «iniciar los trámites» para la anulación de la prórroga del peaje del Huerna, una vez conocido el dictamen de la UE, que la tilda de ilegal. Hay otras peticiones claves de los últimos meses, como la finalización de la autovía del Suroccidente, un impulso al vial de Jove, el enlace de Robledo o finalizar las integraciones ferroviarias de Gijón y Langreo e iniciar la prevista en Avilés.

Muchos de los miembros de la Alianza valoraron el acuerdo. **Álvaro Queipo**, líder de PP, dijo que el documento era de «mínimos», pero que «todos hemos puesto de nuestra parte para que esto se pueda cumplir», recalzó, reclamando en cualquier caso proyectos que no figuran en el acuerdo, como la ronda norte de Oviedo.

Javier Jové, diputado de Vox, se mostró muy crítico pese a haber firmado lo acordado. «Esto no es más que un trampantojo tras el cual Barbón esconde su ineptitud», indicó. Delia Campomanes, de IU, destacó tener «un acuerdo mínimo, ya que ahora quedar seguir reivindicando las cercanías, que son una herramienta clave».

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, lo tildó como «un momento de inflexión muy necesario para Asturias» y **Adrián Pumares**, de Foro, recalzó que «es una muy buena noticia que haya un acuerdo unánime».

María Calvo, presidenta de la FADE, dijo por su parte que considera el documento «importante y positivo, por mostrar un consenso unánime de la sociedad asturiana en sus principales reclamaciones y necesidades en materia de movilidad», un análisis similar al que hicieron las Cámaras de Comercio.

«Hay que poner en positivo este acuerdo, porque siempre es bueno. La unión es positiva, aunque algunos temas se hayan quedado fuera», destacó **Carlos Paniceres**, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que también puso el foco en las cercanías.

«Lo que corresponde ahora es que esos grandes proyectos, entre los que se encuentran el metrotren, la estación intermodal de Gijón o la Zalia, se agilicen y concreten su tramitación», destacó **Félix Baragaño**, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. «Debemos valorar que el gobierno de Asturias escuche las opiniones de los agentes sociales», enfatizó, por su parte, **Daniel González**, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.

«Se recogen todas las materias que para nosotros son importantes», indicó **Javier Fernández Lanero**, de UGT. Su homólogo en Comisiones Obreras, **José Manuel Zapico**, también se mostró satisfecho con el acuerdo, pero dijo que el Ministerio de Transportes destaca por sus incumplimientos.



11 Julio, 2024

Los salarios por convenio firmados este año recogen alzas del 4%

La mayor parte de los trabajadores no tienen cláusulas para paliar los efectos de la inflación

elEconomista.es MADRID.

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,98% en junio, cifra superior a la registrada en el mes previo (2,96%), pero inferior al dato del IPC adelantado de junio, cuya tasa interanual fue del 3,4%, según datos extraídos por *Europa Press* de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Hasta junio se registraron un total de 2.833 convenios colectivos con efectos económicos en 2024, de los que sólo 294 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 3,97%.

El incremento salarial medio recogido en los convenios registrados hasta junio (2,98%) se ha quedado ligeramente por debajo de las directrices marcadas por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de 2023.

En concreto, este acuerdo recomienda subidas salariales del 3% tanto para este año como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

La mayor parte de los convenios registrados hasta junio en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2024. En total, los convenios cubren a algo más de 9 millones de trabajadores.

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados hasta junio no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 2.833 convenios contabilizados, el 20,8% (590) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 317 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a tres millones de trabajadores de los más de 9,08 millones amparados por los convenios registrados hasta junio, el equivalente al 33,04% del total, casi cuatro décimas menos que en mayo (33,5%).



11 Julio, 2024

UGT pide a las universidades públicas una «solución» para los centros adscritos

► Solicita evitar casos como adscribir San Juan de Dios a Comillas

Carmen Laraña. SEVILLA

Resulta complicado defender una cosa y la contraria, pero algo así han hecho las universidades públicas andaluzas tras la propuesta de la Junta de Andalucía de adscribir el Grado de Enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla) a la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

El Centro Adscrito San Juan de Dios imparte la titulación de Enfermería adscrita a la Universidad de Sevilla desde hace varias décadas, cuenta con más de 300 alumnos anuales, 40 profesores y 5 administrativos. Desde siempre había estado adscrito a la Universidad de

Sevilla, pero tras la aprobación de la universidad privada Fernando III y algunas discrepancias entre ambas partes, la Universidad de Sevilla denunció el convenio con la intención de retirarles la adscripción, al igual que ha hecho con el CEU.

En este contexto, la Consejería de Universidad ha tratado de buscar una solución para la continuidad del Grado y el mantenimiento de los empleos. Finalmente, tanto el CEU como San Juan de Dios llegaron, con la intermediación de la Consejería, a un acuerdo sobre la desadcripción. Este pacto establece las condiciones para los alumnos que están cursando los estudios en la actualidad y de forma progresiva. Tras esta desadcripción se ofreció

a la Universidad Pablo de Olavide la posibilidad de que se adscribiese a ellos, lo que esta universidad pública rechazó.

Igualmente, se hizo el ofrecimiento al resto de universidades públicas andaluzas, aunque todas ellas la rechazaron. Por tanto, o se interesaba una privada o estaba condenada a su desaparición.

Los sindicatos CC OO y UGT defienden la decisión de las universidades aunque con matices. Por un lado, las federaciones de enseñanza de ambas centrales rechazan lo que consideran una «estrategia de privatización» del sistema universitario andaluz.

En un comunicado, UGT alarma sobre el incremento de universidades privadas en Andalucía al pasar-

se «en dos años» de contar con «una universidad privada a cinco» actualmente.

A juicio de UGT, «la carrera privatizadora del Gobierno andaluz no se queda en la sanidad. La diferencia es que, hasta ahora, las nuevas universidades privadas fueron aprobadas por el Parlamento, con mayoría absoluta del PP» y señala que la propuesta de adscripción del citado centro de San Juan de Dios a Comillas que, «al ser una universidad con sede en Madrid, no necesitaría pasar por el debate en el Parlamento ni, por ejemplo, el CES, sino solo con el visto bueno del Consejo de Gobierno».

Ahora bien, advierte UGT que «si hay necesidad de que un hospital cuente con centros adscritos para ofrecer titulaciones universitarias deben de ser las universidades públicas andaluzas las que asuman esa función y, si hay algún conflicto, lo que hay es que buscar soluciones a esos problemas y no facilitar la entrada a universidades privadas sin pasar los controles legales exigibles». Si alguna universidad pública hubiera aceptado la adscripción del centro, no hubiera sido necesario recurrir a una universidad privada.



11 Julio, 2024

SANIDAD Unas cien personas se manifestaron el pasado 25 de junio

Concentración en el Hospital de Alcalá: “La falta de personal es alarmante”



Concentración a las puertas del Hospital de Alcalá, en la mañana del 25 de junio.

Juan José Montiel

ALCALÁ LA REAL | Un centenar de personas se concentraba en la mañana del pasado 25 de junio a las puertas del Hospital de Alcalá en una manifestación previa a la huelga convocada en el Servicio Andaluz de Salud para el día 26 por parte de las organizaciones sindicales Satse, UGT, CSIF y Comisiones Obreras. Al grito de “¡En este hospital falta personal!”, “¡Este verano, no te pongas malo!”, o “¡La sanidad se defiende, la sanidad no se vende!”, los manifestantes exhibieron pancartas y dirigido también consignas contra la consejera de Salud, Catalina García, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante la concentración se ha leído, igualmente, un manifiesto. “Hoy nos reunimos aquí, unidos por una causa justa y necesaria, la defensa de nuestra sanidad pública y la reivindicación de condiciones dignas para sus profesionales. La salud es un derecho fundamental y universal, y es responsabilidad de todos nosotros como sociedad asegurarnos de que cada persona recibe la atención que merece. Sin embargo, este derecho está siendo amenazado por la falta de profesionales sanitarios y la precariedad en los contratos de trabajo. Los profesionales de la salud son el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario. Trabajan incansablemente para garantizar la salud y el bienestar de todos nosotros. Su labor es invaluable, y sin ellos nuestro sistema de salud no puede funcionar”.

“Hoy nuestra sanidad pública enfrenta una crisis profunda.

La falta de personal sanitario es alarmante. Las plantillas están cada vez más mermadas, lo que obliga a los profesionales a trabajar bajo una presión insostenible. Esta situación no solo afecta a su salud y bienestar, sino que también pone en riesgo la calidad de la atención que se brinda a los pacientes. La pandemia de covid nos enseñó la importancia de contar con un sistema de salud fuerte y bien dotado. Durante los momentos más críticos muchos profesionales sanitarios fueron contratados para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los profesionales demostraron un compromiso y una dedicación admirables, trabajando en primera línea y enfrentándose a riesgos significativos. Sin embargo, muchos de estos contratos han sido rescindidos o no renovados, dejando a cientos de profesionales en la incertidumbre y sin trabajo. Esto es inaceptable. No podemos permitir que quienes fueron esenciales durante la crisis sean ahora olvidados y relegados a la precariedad”.

“Exigimos adecuación de la plantilla, es imprescindible aumentar la plantilla de profesionales sanitarios de gestión y servicios; renovación y consolidación de contratos covid; contratos estables y condiciones laborales justas; inversión en sanidad, ya que la sanidad pública debe ser una prioridad. No pedimos privilegios, queremos una sanidad pública fuerte, accesible y de calidad. Queremos un futuro mejor para nuestro hospital, en el que los profesionales sean respetados y valorados como merecen”, se concluía.

Marino Aguilera: “Seguimos trabajando para que se cubra la totalidad de la dotación de personal del Chare”

La concentración contó, además, con la presencia del alcalde, Marino Aguilera, y la concejala de Servicios Sociales, Salud y Consumo, Mercedes Linares. “A las diez de la mañana he tenido una reunión con las organizaciones sindicales aquí presentes, a petición de este alcalde, y nos han expuesto la situación que vive este hospital y en general todo el sistema sanitario. Es evidente que queda por hacer. Alcalá en el contexto de centros sanitarios de alta resolución no se encuentra en la peor situación, y de hecho este verano se ha producido un refuerzo de tres médicos, con lo cual las urgencias a nivel de médicos están cubiertas, pero sí es verdad que falta plantilla en niveles inferiores”, señalaba el primer edil.

“Hay también un hándicap, que sí quiero mencionar, y es que el Hospital de Alcalá cuenta con una plantilla de aplastante mayoría femenina. Esto es algo muy positivo, pero también conlleva que hay una cantidad muy elevada de reducciones por maternidad y conciliación, que son derechos absolutamente respetables, y por supuesto nos alegramos de que se amplíen en las familias, pero el problema es que esa cantidad de bajas que se producen no son del todo cubiertas y es ahí donde tenemos que seguir trabajando con la gerencia del Hospital Virgen de las Nieves para que se cubra toda la dotación de personal que tiene este hospital”, concluía Aguilera.



11 Julio, 2024

INDUSTRIA

**Segunda reunión
sin acuerdo para
el nuevo convenio
del Metal P4**



La patronal del Metal rechaza las propuestas sindicales en el segundo asalto de la negociación

La Femca aclara que el actual convenio, firmado en 2021, significó un fuerte impacto económico para las empresas

La próxima reunión tendrá lugar el 10 de septiembre y será entonces cuando empiece el combate definitivo



Firma en Sevilla en noviembre de 2021 del actual convenio del Metal de Cádiz. :: LA VOZ

El Metal agrupa en la provincia a más de 29.000 trabajadores y 5.600 empresas y sus efectos sobre el resto de la masa laboral gaditana son importantes, debido al contingente de empresas y empleados que aglutina. El marco laboral que firmaron las partes en noviembre de 2021 con efecto retroactivo para 2020 expiró en diciembre del 2023. Toca ahora, por tanto, su revisión y actualización.

La propuesta conjunta de UGT y CC OO ha incluido temas como el futuro de los fijos discontinuos del sector, el plus de toxicidad, los permisos retribuidos y el plus de empleo estable. En cuanto a posibles mejoras salariales, no hay que olvidar que el convenio firmado en 2021 y vigente, aún logró unas subidas sin precedentes garantizando el poder adquisitivo de las plantillas del Metal. El año 2023 cerró con un IPC del 3,5% y este registro es el que marcará la negociación ante cualquier iniciativa de subida salarial.

El acuerdo que suscribieron las partes en noviembre de 2021 tras dos semanas de huelga general incluyó que la diferencia entre la inflación real de cada ejercicio y la subida salarial acordada (un 2% anual) se consolidaría, en un 80%, en las tablas salariales. Asimismo, al final de la vigencia del convenio, es decir, ahora, si existiera diferencia entre las subidas totales y el IPC real de estos tres años, se incluiría también en las tablas salariales desde el 1 de enero de 2024. La patronal reconoció entonces las dificultades que tenía para poder cumplir con este acuerdo en un momento de inflación y de incremento de los costes de producción.

Los empresarios consideran que el aumento de días por asuntos propios y de permisos retribuidos supondría un aumento salarial del 2,5%



JAVIER RODRÍGUEZ

✉ jrodriguez@lavozdigital.es

CÁDIZ. La segunda reunión para perfilar el nuevo convenio del Metal de Cádiz ha terminado, como era de esperar, sin acercamiento y con el rechazo de la patronal a las propuestas sugeridas por los sindicatos.

Este nuevo encuentro tuvo lugar el martes entre las centrales mayoritarias, UGT y CC OO, y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca). Durante la reunión, los empresarios de-

jaron muy claro que no habían tenido tiempo de valorar la totalidad de las reivindicaciones que planteaban los representantes de los trabajadores, pero adelantaron que en materia de aumento de días por asuntos propios y permisos retribuidos, como plantean los sindicatos, resulta «inviabile». Los empresarios avanzan que estas medidas que esgrimen los sindicatos supondrían un aumento salarial del 2,5%. En este sentido, la patro-

nal advierte que la aplicación del actual convenio ya significó un fuerte impacto entre las empresas debido a la subida salarial que recogió su firma.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo 10 de septiembre, donde el debate será capítulo por capítulo, con la intención de llegar a un acuerdo definitivo a lo largo del próximo otoño.

La reunión transcurrió bajo un clima de cordialidad y tranquilidad. Será a la vuelta de vacaciones cuando la situación cambie, ya que cada uno colocará sobre la mesa las posiciones inamovibles. Una de las propuestas que ha dejado clara la patronal es la traslación al convenio del Metal de Cádiz todo lo referido a absentismo que recoge el convenio nacional. Se trata de medidas más duras.



11 Julio, 2024

UGT corrige a Garamendi: «La reducción es de 16 días, no 12»

LUCÍA PALACIOS

MADRID. Las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegurando que reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas supone «regalar casi 12 días de vacaciones al año pagadas por las empresas» no han dejado indiferentes a los sindicatos. Al res-

pecto se pronunciaron este miércoles abiertamente muy críticos con estas palabras e incluso las calificaron de «esperpénticas». «¿Quién lo regala?», preguntó con ironía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. «Parece como si estuviéramos en la Edad Media y el dueño del tiempo fuera el empresario», denunció.

Que los sindicatos arremetieran contra estas declaraciones de Garamendi no sorprende, pero sí que le hicieran una corrección al alza. «Según nuestros cálculos, para las personas que tengan 40 horas semanales de jornada, la reducción es de 16 días, no de 12».

Pese a esto, Álvarez siguió apostando por negociar con la patronal, pero se preguntó «de dónde han salido estos empresarios, parece que vienen de Marte», puesto que les recordó que la reducción de la jornada siempre se ha hecho sin merma salarial. «Nun-

ca en la historia se ha hecho una reducción general del tiempo de trabajo reduciendo los salarios, es absurdo», apostilló.

Es más, el líder de UGT defendió que la productividad que se ha generado en España desde hace 40 años «permite no reducir dos horas y media la semana en algunos casos, que son muy pocos, sino que permite reducir mucho más la jornada».

En esta misma línea se pronunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, y argumentó que «somos de echar muchas horas

que no siempre son tan productivas», por lo que abogó por «centrarse en que el trabajador tenga un tiempo para disfrutar».

Por su parte, el Consejo General de Gestores Administrativos de España publicó ayer un informe sobre el impacto económico que supondrá esta medida y cifró en más de 15.300 millones de euros el coste para las empresas de reducir la semana laboral a 37,5 horas. Y eso «como mínimo», ya que sus estimaciones se basan en que todos los trabajadores cobran el salario mínimo.



UGT presenta una propuesta para “modernizar el servicio postal en España”



Imagen de la sede de Correos en Melilla

■ FB

El pasado 6 de junio, UGT Servicios Públicos presentó un informe titulado "El Modelo Postal en España para el Siglo XXI". Este documento examina detalladamente la situación actual de Correos y plantea propuestas para avanzar hacia un modelo que combine la prestación adecuada del servicio público con la viabilidad económica.

El Gobierno ha comunicado a UGT que la propuesta enviada, denominada "Un nuevo modelo postal para el Siglo XXI necesario y posible", es considerada seria y razonable. Actualmente, se está trabajando en los ámbitos per-

tinentes para responder lo más pronto posible, con el objetivo de desarrollar un proyecto viable para Correos y el Servicio Público Postal. UGT espera recibir una respuesta favorable del Gobierno durante el mes de julio.

Desde la organización sindical, se ha valorado positivamente la intención política de emprender con urgencia un proyecto que permita a Correos recuperar su papel de utilidad social y económica. Esto se da tras una etapa de desvertebración organizativa y una gestión deficiente del operador postal, denuncias que UGT y CCOO han reiterado en los últimos cinco años.

No obstante, UGT subraya que, para proyectar el futuro, no se deben relegar problemas actuales, como la insuficiencia de recursos para mantener el servicio postal universal. Por ello, esperan que la Dirección de Correos adopte medidas inmediatas para solucionar este y otros problemas presentes.

El informe, elaborado por el Gabinete de Estudios Postales de UGT Servicios Públicos y enviado tanto a la Presidencia de Correos como al Ministerio de Hacienda, argumenta que la misión del Servicio Postal Universal (SPU) confiada a Correos sigue siendo esencial. Sin embargo, esta misión debe ampliarse y adaptarse a los profundos cambios sociales, de comunicación y de consumo.

Correos, como operador designado para la prestación del SPU, debe transformarse

en un Servicio Público Estratégico del siglo XXI, ofreciendo Servicios de Interés Económico General (SIEG) y nuevas misiones de cohesión y vertebración territoriales. Además, debe garantizar la universalidad de los instrumentos financieros básicos y la accesibilidad a servicios digitales, especialmente en administración, sanidad y educación. Este nuevo modelo debe ser competitivo, excelente, moderno, eficiente, sostenible, comprometido con la sociedad y financieramente viable.

UGT subraya la necesidad de que el Gobierno tome decisiones estratégicas para recuperar Correos como empresa pública y revitalizar el Servicio Público Postal tras una etapa que ha debilitado seriamente al operador en España.

La posición de UGT es clara: es esencial dotar de nuevos servicios estratégicos a la población, garantizando la sostenibilidad y un empleo de calidad en el Operador Público Postal. La organización reconoce que otros sindicatos han replicado su modelo, lo cual considera positivo para que el Gobierno adopte decisiones estratégicas necesarias. Sin embargo, UGT aclara que su propuesta no se basa únicamente en solicitar un mayor aporte económico del Estado sin beneficio para la sociedad. La intención es proporcionar nuevos servicios estratégicos, especialmente a la población más vulnerable, garantizando la sostenibilidad del modelo y la calidad del empleo en Correos.



11 Julio, 2024

Los sindicatos denuncian que la bolsa de empleo de celadores no se actualiza desde hace seis años

EL NORTE

VALLADOLID. Los sindicatos denunciaron ayer que Sacyl lleva seis años sin actualizar la bolsa de empleo de celadores. Comisiones Obreras expuso que este colectivo «está llegando al límite de su paciencia», mientras que UGT recalcó la «inoperancia, incapacidad e inutilidad» de la Consejería de Sanidad en la gestión que hace de la bolsa de empleo de todas las categorías de Sacyl, con especial incidencia en el caso de los celadores, con más de 30.000 profesionales afectados, además de destacar los «problemas» que sufren los solicitantes, al ser personas a las que «no se les contrata y se genera una responsabilidad patrimonial» desde la Administración autonómica por «incumplir sus propias normas», lo que deriva en un «daño económico».

El listado que actualmente está en vigor corresponde a los méritos de 2018, lo que supone que

los profesionales que han trabajado durante estos años y han invertido tiempo y dinero en formación, «no han tenido oportunidad de ser incorporadas según sus méritos en el listado definitivo de personas candidatas», señalan desde CC OO.

La central sindical comentó que el hecho de no actualizar el corte anual, «contraviene la propia normativa de Sacyl que regula el funcionamiento de la bolsa abierta y permanente».

Así, la secretaria de Sanidad UGT de Castilla y León, Rosa López, explicó que la orden por la que se constituyen las bolsas y donde se regulan las bases comunes establece que a lo largo

Comisiones Obreras alerta de que el colectivo «está llegando al límite de su paciencia»

de cada año natural se produce una fecha de corte donde se realiza una convocatoria para reflejar los nuevos méritos de los candidatos que quieran participar. Es decir, todos los años debe existir una convocatoria, algo que «no se cumple», ya que el procedimiento de gestión de los nuevos candidatos dura hasta cuatro años para publicar los listados definitivos de cara a la contratación.

Por ello, consideró que es «muy importante» abordar esta problemática al ser la «herramienta de transparencia» a la hora de llevar a cabo contrataciones.

Contar con determinada formación sirve para ganar puntos a la hora de incorporarse a estas bolsas, los cuales son pagados del propio bolsillo de los profesionales y tienen una caducidad de diez años, por lo que el tiempo que pasa desde que se produce la solicitud es un margen que se pierde, apuntó por su parte el secretario Acción Sindical de UGT SP Zamora, Jerónimo Cantuche.

Cantuche aseguró que hay una «gestión ineficaz», porque hay muchos cargos y responsables dentro de Sacyl, pero «no se cuenta con personal suficiente» para poder gestionar estas bolsas de empleo.



Los bomberos no cumplen el tiempo de respuesta en el 80% de las salidas, según UGT

REDACCIÓN

BADAJOS. UGT Servicios Públicos Extremadura mostró ayer miércoles su «profunda preocupación» por el «continuo incumplimiento» del protocolo de movilización de siniestros por parte del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz.

Según los registros, en el 80% de las salidas en las que el cuerpo de bomberos son requeridos, el protocolo no se está cumpliendo adecuadamente, un «grave incumplimiento» que, a juicio del sindicato, refleja la «falta de seriedad» del presidente del CPEI, Miguel Ángel Gallardo, hacia el colectivo que dirige.

Como resultado, «los principales perjudicados son la ciudadanía, ya que se retrasa el tiempo de respuesta ante emergencias, comprometiendo la seguridad y el bienestar de la población», según señala UGT en nota de prensa.

Señala el sindicato que esta situación «no solo pone en riesgo la integridad» de los bomberos, sino que también afecta negativamente a su «capacidad para afrontar y resolver emergencias de manera efectiva». Por ello, UGT reclama a Miguel Ángel Gallardo que «tome las medidas necesarias de manera urgente para corregir esta situación», ya que en caso contrario, el sindicato advierte de que se verán «obligados a tomar medidas más contundentes».



SANIDAD | LABORAL

El sector de las ambulancias iniciará este viernes una huelga indefinida

CGT convoca a más de 250 trabajadores en Ávila como protesta por el convenio laboral de 2022 que recorta su salario

E.C.B. / ÁVILA

El sector de las ambulancias de Castilla y León ha dicho basta. El sindicato mayoritario CGT (Confederación General de Trabajadores) anuncia una huelga indefinida a partir de este viernes, 12 de julio, si no se solventan las reivindicaciones de 3.000 trabajadores de Castilla y León, más de 250 de ellos de la provincia de Ávila, que como explica Juan Bernabé, presidente del Comité de Empresa de Ambulancias de Ávila y secretario general de la Coordinadora Regional del Transporte Sanitario de CGT en Castilla y León, son principalmente salariales, pues «mientras aquí el salario base medio está entre los 1.000 y los 1.050 euros como máximo y para las nuevas incorporaciones, de 940 euros, en otras comunidades como Madrid o País Vasco alcanza los 2.000 euros y también están en huelga».

Este viernes habrá piquetes informativos en la puerta de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles para explicar los motivos de la huelga. Pero ya el pasado 5 de julio se convocó una manifestación ante la Consejería de Sanidad en Valladolid para denunciar los graves incumpli-

mientos del contrato que la empresa HT Group recibió de la Junta de Castilla y León.

El origen de todo el conflicto se encuentra en la firma del nuevo convenio laboral del año 2022 por parte de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que, dos años después, han desaparecido del sector en casi todas las provincias por culpa de ese acuerdo. «El 84% de la plantilla estuvo en contra de aquel convenio porque nos bajaba el sueldo. Ese convenio nos ha sumido en la pobreza, porque estamos con salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional», afirma Juan Bernabé, quien explica que el convenio se firmó porque «hubo presiones por parte de la empresa para que se firmara. Además, un sindicato nos vendió y aceptó ese convenio por sus propios intereses, no por el beneficio de los trabajadores».

Habrán piquetes informativos en la puerta de Urgencias del hospital el viernes



11 Julio, 2024

LAS FRASES DEL DÍA

Pepe Álvarez Secretario general del UGT

Critica la postura de la patronal en la negociación de la reducción de la jornada laboral



«Nunca en la historia se ha hecho una reducción general del tiempo de trabajo reduciendo los salarios, es absurdo»

Francesca Albanese Relatora de la ONU para Palestina

Guerra en Oriente Próximo



«Hay hambruna en el conjunto de Gaza. Es la consecuencia de la acción intencionada de Israel»

George Clooney Actor

Pide a su «amigo» Joe Biden que se retire como candidato demócrata a la Casa Blanca



«En los últimos cuatro años ha ganado muchas batallas, pero hay una que no puede ganar: la batalla contra el tiempo»

LABORAL ESTADÍSTICA

La pujada salarial mitjana pactada en conveni arriba al 2,94% al juny

LLEIDA | Els salaris pactats en conveni van pujar a la província de Lleida una mitjana d'un 2,94% al juny, xifra inferior a la dada de l'IPC avançat del mes, la taxa interanual del qual va ser del 3,4%, segons l'estadística de negociació col·lectiva del ministeri de Treball, mentre que en el conjunt de l'Estat es va quedar en el 2,98%. Del total dels 12 convenis registrats fins al juny a la província, la meitat eren d'empresa, amb efectes sobre 222 treballadors i una pujada salarial mitjana de l'1,92%, mentre que els sis restants eren convenis sectorials i donaven cobertura a 31.664 treballadors, amb una pujada salarial mitjana

del 2,94%. L'increment salarial mitjà recollit als convenis registrats a Espanya fins al juny s'ha quedat lleugerament per sota de les directrius marcades per CCOO, UGT, CEOE i Cepyme en el V Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva, de la firma del qual ja s'ha complert el primer aniversari. Fins al juny es van registrar a l'Estat un total de 2.833 convenis col·lectius amb efectes econòmics el 2024, dels quals només 294 s'han firmat aquest mateix any, amb una pujada salarial mitjana del 3,97%. La resta de convenis, 2.539, es van firmar en exercicis anteriors i recullen un increment salarial mitjà del 2,88%.



BREVES

ECONOMÍA

Denuncian que Sacyl lleva 6 años sin actualizar la bolsa de celadores

■ CCOO y UGT denunciaron ayer que la bolsa de trabajo de los celadores lleva sin actualizarse seis años. El primero destacó la «discriminación» que sufren los celadores de Sacyl debido al «retraso inadmisibles de la actualización de la

bolsa de empleo». La organización expuso que este colectivo «está llegando al límite de su paciencia». Por su parte, UGT subrayó «la inoperancia, incapacidad e inutilidad» de la Consejería en la gestión de las bolsas de trabajo, pero con especial incidencia en la de celadores con más de 30.000 afectados. Demandó crear un servicio administrativo dentro del Sacyl.

PROTESTA POR OTRO ACCIDENTE LABORAL MORTAL

■ Los sindicatos CC OO y UGT de Jaén convocaron para el día de hoy una concentración en repulsa por el fallecimiento de un trabajador en el municipio jienense de Alcaudete. Así, pretenden denunciar que, en lo que llevamos de año, hasta 64 personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía. El suceso alcaudetense ocurrió el pasado lunes, 8 de julio, cuando un hombre se precipitó desde la cubierta de una nave, situada a 10 metros de altura.



11 Julio, 2024

Los sindicatos alcanzan un preacuerdo en FerroGlobe con alza del 8,5% en 3 años

REDACCIÓN
A CORUÑA

Las organizaciones sindicales han alcanzado un preacuerdo en la negociación del III Acuerdo Marco de FerroGlobe, que tiene una fábrica en Arteixo, con subidas salariales del 8,5% en tres años más un incentivo de 500 euros, tras 17 reuniones mantenidas durante un año y siete meses de negociación y un calendario de movilizaciones que incluyó una jornada de huelga con un “amplio” seguimiento por parte de las plantillas.

Ahora los sindicatos van a trasladar las condiciones pactadas en el principio de acuerdo a los distintos centros de trabajo para que sean refrendadas y proceder a continuación a la firma del acuerdo, que tendrá lugar el próximo 24 de julio.

Desde UGT FICA valoran el principio de acuerdo alcanzado, ya que, según señala la sección sindical en un comunicado, dicho preacuerdo garantiza, como venía reivindicando la organización, el mantenimiento del poder adquisitivo de las plantillas, con incrementos salariales todos los años de vigencia del acuerdo y con mejoras en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del Grupo FerroGlobe.

11 Julio, 2024

Los trabajadores de la limpieza de Poio convocan huelga desde el día 22 para pedir más salario

R. P.
POIO

La asamblea de trabajadores de la empresa Valoriza Medioambiental, concesionaria del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria de Poio, convocará una huelga indefinida a partir del próximo lunes 22 de julio. Esta decisión, según informó ayer el responsable de la federación de servicios a la comunidad de UGT, Carlos Corredoira, se ha adoptado por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, que permanece sin revisar desde el año 2019.

A pesar de que se han celebrado dos encuentros entre la patronal y el comité de empresa, ambas partes han sido incapaces de llegar a un acuerdo para renovar este convenio regulador. Corredoira señaló que los salarios de los trabajadores están desactualizados y, en estos momentos, acumulan una merma económica de más de un 17 %, lo que deja a la plantilla de Valoriza en Poio en una situación “insostenible”.

“Todos sufrimos el incremento de precios de estos últimos años, por lo que estos salarios no renova-

dos están en desacuerdo con los costes de la vida”, según el representante sindical.

Desde UGT señalan que, frente a esta paralización que se produce en Poio, la mayoría de convenios de limpieza están siendo actualizados, sobre todo los de la empresa Valoriza. Entienden que la situación en Poio supone un “agravio” y desde la representación sindical indican que hasta esa fecha intentarán retomar las negociaciones para lograr un acuerdo y evitar un perjuicio a la ciudadanía.

El sindicato reitera que la situación que se da en este municipio pontevedrés supone un “agravio”, por lo que exigen que se retomen las negociaciones para lograr un acuerdo. Los trabajadores aseguran que intentarán “por todos los medios” llegar a este acuerdo antes de que comience la huelga indefinida para que esta reclamación laboral “no incida negativamente” en la vida diaria de los ciudadanos de Poio.

En este año 2024 se celebraron dos reuniones entre los representantes de los trabajadores y la empresa sin que se alcanzaran acuerdos.

LABORAL, SECTOR



En foco

R. Fdez. MADRID

La polémica está servida. Y todo a cuenta de un «caso Cano» que para muchos ha sido obra del cálculo y la oportunidad. Ayer, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado la detención del productor musical Nacho Cano, por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical «Malinche», en el «interés» que está teniendo el Ejecutivo central y el presidente, Pedro Sánchez, en «tratar de desviar la atención».

La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que la «presunta detención» y la «campana de desprestigio» contra un artista como Nacho Cano, a quien la Policía arrestó por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para «Malinche», lanza «un mensaje muy preocupante» y ha advertido de que «la destrucción personal con fines políticos» es «simplemente estalinismo».

Así lo ha señalado este miércoles, en la Real Casa de Correos, durante la clausura del acto de presentación del Festival de la Hispanidad, que se celebrará en la comunidad del 4 al 13 de octubre.

La presidenta regional ha subrayado que «ayer se mandó un mensaje muy preocupante» a «cualquiera que se atreva a disentir». «Se ejecutó el atropello a uno de los artistas que más ha hecho por la música en español a ambos lados del Atlántico», se ha pronunciado Ayuso sobre la detención del artista y productor musical.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, el «desmérito del artista como forma de ataque al adversario» es «solo propio de países que lo han perdido todo», ha advertido Díaz Ayuso, que en la presentación de la Hispanidad ha tenido palabras de apoyo para los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

También se ha referido a los «jóvenes con un extraordinario talento» llegados de México para participar en «Malinche» y que «no tenían oportunidades allí», pero que «han podido dejar atrás entornos vulnerables para conquistar sus sueños».

Por todo ello, Ayuso ha salido en defensa de Cano y ha dicho que lo que «pretenden hacer con él es inaceptable». «No podemos callar y no nos calleemos», ha sentenciado.

En ese sentido, desde el Gobierno madrileño se ha afirmado que «tenemos la sensación de que esta



Ayuso denuncia «estalinismo» contra Nacho Cano

► La presidenta madrileña apunta a Moncloa en un caso que busca «señalar y desacreditar al que discrepa del poder»

cuestión de Nacho Cano trata de desviar la atención sobre lo grave que está ocurriendo en nuestro país, sobre todos esos casos de corrupción que están asediando al propio presidente del Gobierno, a su partido, a su Gobierno y a su propia familia», ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos.

En este sentido, el consejero madrileño ha hecho alusión a que «la UCO ha entrado en el despacho que se ha creado a toda velocidad para justificar la actividad en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente» y recientemente se ha visto cómo «la mujer del presidente, Begoña Gómez, tenía que declarar ante los juzgados» por «presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias».

En todo caso, ha señalado que

el artista «tiene derecho a defenderse como también lo tienen todas las personas, esos becarios que se han querellado y que han manifestado su disconformidad con esta actuación que se ha producido».

Por otro lado, ayer, y en medio de toda esta polémica, el equipo ejecutivo de «Malinche», dirigido por el músico Nacho Cano, ha anunciado que estudia acciones legales contra Renfe tras la rescisión del acuerdo comercial, denunciando al mismo tiempo que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible liderado por Óscar Puente «se haya prestado a colaborar en deslegitimar» al productor y al musical.

«Tinta de calamar»

Considera que «hay determinadas personas, en este caso un presidente del Gobierno, ni más ni menos, que está obsesionado con utilizar todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de



EUROPA PRESS



Imagen de la presentación del festival Hispanidad este miércoles en la capital. A la derecha, el cantante colombiano Manuel Turizo

El Gobierno madrileño apunta a una clara «sobreactuación» de algunos ministerios

El abogado de «Malinche» asegura que los jóvenes no están en una situación irregular

echar tinta de calamar sobre algo que le afecta y que le afecta de lleno y en lo personal».

Habla el abogado de «Malinche»
 Ante el maremágnum de noticias en las últimas horas, LA RAZÓN ha pedido una información detallada de los hechos a Alonso Morgado, abogado de «Malinche». Nos aclara, en primer lugar, la situación legal de 17 estudiantes mexicanos becados por Nacho Cano: «No es cierto que sea irregular. Los jóvenes llegaron a España con visado de turista, válido durante 90 días. En marzo, dentro del plazo establecido, solicitaron el visado de estudiantes y en mayo se lo denegaron alegando que los estudios no estaban homologados. Esa denegación fue recurrida en junio, lo que significa que los estudiantes se encuentran en esa fase de recurso, no en situación irregular ni ilegal. Teniendo en cuenta que ahora mismo se están resolviendo expedientes de enero

de 2024, la solución no llega de un día a otro».

Morgado lamenta también que se haya informado de manera errónea sobre su situación laboral. «Se encuentran en período de formación. Reciben clases por de canto, baile e interpretación. La formación se complementa con prácticas que realizan dentro del elenco y, de manera esporádica, participan en pequeños papeles o corales. Es falso que trabajen en barras ni en ningún otro sitio».

La pregunta es también ¿por qué ha habido esa confusión? Aclara que en sus declaraciones ante la Policía, los jóvenes se vieron coaccionados para responder y firmar algo que no se ajustaba a lo que ellos habían dicho. «Sus palabras fueron manipuladas y cambiadas por conceptos que variaban el contenido», dice. Sospecha que detrás de esto está el hecho de que Nacho Cano es «un elemento molesto en el mundo de la cultura porque no les baila el agua».



11 Julio, 2024

Cinco jueces del TC que rebajan los ERE, bajo la sombra de la incompatibilidad

La ponente de las exoneraciones de altos cargos del PSOE participó en 22 sentencias sobre el caso y fue premiada por gobiernos socialistas

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

Cinco de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han votado a favor de las rebajas de condenas en el caso de los ERE habrían podido incurrir en causa de incompatibilidad por sus vínculos notorios con los altos cargos investigados o por haber participado de alguna ma-

nera en diligencias, sentencias judiciales o resoluciones relacionadas con la causa. Se trata de Inmaculada Montalbán, ponente de todas las resoluciones relacionadas con los 12 recursos presentados por los altos cargos condenados en el Supremo en la pieza principal de los ERE; Cándido Conde-Pumpido, presidente del

TC, el ex ministro Juan Carlos Campo, y las magistradas María Luisa Balaguer y María Luisa Segoviano. Todos ellos incurren en algunas de las causas de incompatibilidad que define el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que son aplicables a los miembros del Tribunal Constitucional. **Página 14**



Los magistrados miembros del Tribunal Constitucional (TC), con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, en un primer plano. BERNARDO DÍAZ

Cinco jueces del TC podrían incurrir en incompatibilidad para los ERE

Adoptaron resoluciones vinculadas con la causa o tuvieron relación con los condenados

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA
 Cinco de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han votado a favor de las rebajas de condenas en el caso de los ERE habrían podido incurrir en causa de incompatibilidad por sus vínculos con los altos cargos condenados por el Supremo o por haber participado de alguna manera en diligencias, sentencias judiciales o resoluciones relacionadas con la causa. Se trata de Inmaculada Montalbán, ponente de todas las resoluciones que dan respuesta a los doce recursos presentados por los altos cargos condenados en la pieza principal de los ERE; Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC; el ex ministro Juan Carlos Campo; y las magistradas María Luisa Balaguer y María Luisa Segoviano.

Todos ellos podrían estar afectados por alguna de las causas de incompatibilidad que define el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que son aplicables a los miembros del TC, dado que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que le es de aplicación con carácter supletorio la LOPJ en materia de recusación y abstención.

Entre esas causas cabe destacar la número 9, que atañe a los magistrados que tengan una relación de «amistad íntima o enemistad mani-

fiesta con cualquiera de las partes»; la número 11, que afecta a quienes hayan «participado en la instrucción de la causa penal o hayan resuelto el pleito o causa en anterior instancia»; la número 13, que considera razón de incompatibilidad «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa en otro relacionado con el mismo»; y la número 16, «por haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad».

Conde-Pumpido sí vio razones para inhibirse en el Supremo

Montalbán intervino en 22 sentencias de la causa en el TSJA

Pues bien, Cándido Conde-Pumpido podría haber incurrido en la causa número 13 de incompatibilidad ya que ocupaba el cargo de fiscal general del Estado al inicio de la instrucción de los ERE. De hecho, él mismo se abstuvo de participar en el proceso cuando era magistrado del Tribunal Supremo (TS) por este motivo. El caso ERE llegó al Supremo en 2014 una vez que la instrucción de la juez Mercedes Alaya apuntó a ex altos cargos de la Junta que en ese momento tenían escaño en las Cortes y, por tanto, estaban aforados, como era el caso de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías.

En el escrito presentado el 8 de septiembre de 2014 al presidente de la Sala Segunda del TS, el propio magistrado invoca esa causa número 13 y considera que su papel en el pasado como fiscal general del Estado «aconseja la abstención en esta fase jurisdiccional para garantizar la más absoluta imparcialidad del tribunal». Sin embargo, y aunque el régimen de incompatibilidades es el mismo, Conde-Pumpido no se ha abstenido en el debate y votación de las resoluciones del Constitucional sobre los ERE. La próxima semana el TC debatirá y resolverá los recursos presentados por los ex presidentes Chaves y Griñán.

En el caso de Inmaculada Montalbán,

como presidenta de la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue ponente o participó en al menos 22 sentencias entre 2018 y 2021 relacionadas con las ayudas socio-laborales pagadas con el fondo de reptiles. Montalbán ha sido ga-

El régimen de incompatibilidad es el mismo para el TC y el Supremo

El TC resolverá la semana próxima los recursos de Chaves y Griñán

ardonada reiteradamente por los gobiernos socialistas de la Junta. Se le reconoció dos veces con el Premio Meridina (en 2000 y 2010) y se le concedió la Medalla de Andalucía en 2012, siendo presidente Griñán. Además, la Delegación del Gobierno en Andalucía le otorgó en 2022 el Premio Menina.

Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero antes ocupó varios cargos dependientes de los condenados por los ERE. Así, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el gobierno de Manuel Chaves (entre 1997 y 2001) y secretario de Estado de Justicia, al tiempo que Gaspar Zarrías lo fue de Cooperación Territorial, desde 2009 a 2011, en el gobierno de Zapatero. Posteriormente, ocupó el cargo de secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía entre 2014 y 2015. Como cargo público emitió valoraciones sobre el caso en varias ocasiones. Así, por ejemplo, en 2016, durante unas declaraciones realizadas como candidato en la lista socialista por Cádiz, Campo habló de que en el caso ERE «no hubo menoscabo de fondos públicos». Posteriormente, en una entrevista en la Ser como portavoz de Justicia del PSOE, en 2016, mostró su «perplejidad» por el procesamiento de Chaves y Griñán.

La magistrada María Luisa Balaguer fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía entre los años 2012 y 2014, siendo ponente en al menos 28 dictámenes relacionados con los ERE. Por ejemplo, se abordaron las revisiones de oficio de las subvenciones ilegales o la inclusión de intrusos (personas que no tenían derecho a las prejubilaciones recibidas) en las pólizas pagadas con fondos públicos.

Por último, la magistrada María Luisa Segoviano intervino como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en un auto (ATS 331/2018) relacionado con el ERE de la empresa Nexprom SA; así como en la sentencia (STS 3692/2021) por la ayuda concedida a la compañía SOS Cuétara, ambos con financiación del fondo de reptiles de la Junta.

INCOMPATIBILIDADES

1. C. CONDE-PUMPIDO.
 Se abstuvo de conocer los ERE cuando era magistrado del Supremo por su etapa como fiscal general del Estado.

2. JUAN CARLOS CAMPO. Chaves lo nombró alto cargo de la Junta. Fue secretario de Estado a la vez que Zarrías.

3. LUISA SEGOVIANO.
 Como magistrada de la Sala Social del Supremo firmó una sentencia y un auto sobre los ERE.

4. LUISA BALAGUER.
 Fue ponente de, al menos, 28 dictámenes sobre los ERE en el Consejo Consultivo de Andalucía.

5. I. MONTALBÁN.
 Premiada por Griñán. Participó en 22 sentencias del TSJA sobre los ERE.



11 Julio, 2024

J. de Antonio. MADRID

La reducción de jornada tendrá un coste de más de 15.300 millones para las empresas, con un impacto medio en las cuentas de una sociedad tipo española de más de 84.000 euros. Bajo este supuesto, el Consejo General de Gestores Administrativos de España ha hecho el cálculo sobre una plantilla tipo de cuatro empleados que trabajan a jornada completa y uno de ellos que trabaja media jornada, en una semana laboral partida de 40 horas. Teniendo en cuenta las 12 horas en las que debe producir -por ejemplo una fábrica-, tendría que haber tres personas a la vez en la empresa trabajando, con lo que al considerar las doce horas de apertura diaria por cinco días a la semana y tres personas de forma permanente atendiendo las necesidades de la empresa, los analistas de los gestores calculan que se precisan 180 horas a la semana para cumplir con el trabajo.

Si se dividen estas 180 horas entre 40 horas semanales por persona, la empresa precisaría 4,5 personas, cuatro a jornada completa y una a media jornada. El estudio trabaja sobre la base de que cada empleado cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15.876 euros al año, ascendiendo los costes sociales a 1.748 euros por año y trabajador, con lo que cada contrato laboral tiene un coste para la compañía de 17.624 euros al año, resultante de sumar el salario anual más los costes sociales. Al multiplicar este importe por 4,5 personas, la cifra anual se eleva a 79.308 euros al año de costes laborales para la empresa tipo española. De esta manera, si la semana laboral se reduce a 37,5 horas, el número de trabajadores que se precisarían sería de 4,8 per-

► Los gestores administrativos calculan que «cada media hora de reducción tendría un impacto de unos 3.000 millones de euros»

Rebajar la jornada costará 84.000 € al año a una empresa media



Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo

sonas, lo que significa que el contrato de uno de los trabajadores pasaría de media jornada a un 80% de la jornada.

A partir de ahí, los gestores han multiplicado el coste por contrato completo, 17.624 euros anuales, por 4,8 contratos, con lo que el re-

sultado asciende en este caso a 84.595,2 euros de costes laborales anuales totales. En este contexto, «el coste para esta empresa tipo se habrá visto incrementado en 5.287,2 euros al año, un 6,7% más que antes de la reducción». Al multiplicar esta cifra -en números

redondos- por 2,9 millones de empresas, el incremento será de 15.332,9 millones de euros para todo el tejido productivo, por lo que «cada media hora de reducción de la jornada tendría un impacto para las empresas de unos 3.000 millones de euros».

Para Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo, este es un «cálculo de mínimos», ya que habría que considerar «que habría más vacaciones, por lo que se tendrían que cubrir más horas que no hemos tenido en cuenta. Es difícil encontrar empresas que paguen a todos sus trabajadores el SMI, por lo que, insisto, estamos hablando de unas cantidades mínimas».

Además, señala que la reducción de la semana laboral «puede producir otros efectos», como que se incrementen las horas extraordinarias, convirtiendo éstas como un «sustituto perfecto» de las horas ordinarias, al tiempo que se podría producir en algunos sectores un «incremento de

La medida que quiere aprobar el Gobierno tendría un coste global de más de 15.300 millones

la economía sumergida», sobre todo en aquellos casos donde los controles horarios y la monitorización por parte de la Inspección de «no hagan posible sustituir la masa de horas ordinarias faltantes en extraordinarias».

En este sentido, Santiago augura un impacto negativo sobre la productividad por hora efectiva de trabajo y avisa de que, en algunos casos, podría llevar al «despido de empleados» si hubiera automatización de tareas. «El resultado final no sería bueno para nadie», ha remarcado, antes de reclamar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «si quieren reducir la semana laboral, compensen a las empresas este sobre coste, bien con menos cotizaciones sociales o bien ajustando el SMI».



La jornada de 37,5 horas costará 15.000 millones a las empresas

► Las subcontratadas por el sector público no podrán repercutir la subida en sus precios

BRUNO PÉREZ / GONZALO D. VELARDE
 MADRID

Toda reforma o ajuste en el marco fiscal o laboral tiene un impacto económico y aunque a menudo este es ignorado por sus promotores existe y en no pocas ocasiones es relevante. Los gestores administrativos se han tomado la molestia de estimar la factura que puede pasar al tejido empresarial la reducción de la jornada semanal máxima a 37,5 horas comprometida por los socios del Gobierno y su conclusión es que podría elevar sus costes en más de 15.300 millones de euros.

La entidad que preside Fernando Santiago ha realizado el cálculo a partir del impacto potencial de la medida sobre la empresa tipo del tejido doméstico: con 4,5 empleados, es decir, con cuatro empleados a jornada completa y uno a media jornada, con una semana laboral media de 40 horas y una carga semanal de trabajo de 180 horas. La referencia salarial tomada ha sido el salario mínimo interprofesional, no el sueldo medio, para simplificar el cálculo.

Bajo esos parámetros, la primera consecuencia de restringir la jornada semanal a 37,5 horas es que obligaría a esa empresa tipo a alargar la jornada del trabajador a tiempo parcial hasta el 80% de su jornada completa para hacer frente a la carga de trabajo semanal. El coste de ese reajuste rondaría los 5.000 euros extra al año, que no irían de forma íntegra al bolsillo del trabajador sino también a la caja de Hacienda y Seguridad Social en forma de impuestos y cotizaciones sociales.

Para estimar el impacto sobre el conjunto del tejido productivo, el Colegio



Una empresa de limpieza // ABC

de Gestores Administrativos multiplica ese coste extra para la empresa tipo por los 2,9 millones de empresas censadas en España elevando la factura total hasta los 15.332,9 millones en concreto. El ejercicio revela también que por cada media hora que se reduce la jornada laboral mensual el tejido empresarial asume un coste inducido de 3.000 millones. Y es una estimación de mínimos, ya que se calcula sobre una empresa que pague el SMI a todos los

3.000 millones de euros le cuesta al tejido empresarial español cada recorte de media hora en la jornada de trabajo semanal

trabajadores, algo difícil de encontrar en la realidad, y sin contar el gasto extra por la cobertura de las vacaciones.

Según el colegio que agrupa a los profesionales encargados de gestionar y resolver los trámites cotidianos de las empresas, la reforma que está impulsando el Gobierno «puede producir otros efectos», como un aumento de las horas extra para evitar ampliar las horas ordinarias de trabajo y esquivar los sobrecostes que de ello se pudieran derivar en empresas que ya anden muy justas de márgenes. «Se podría producir en algunos sectores un incremento de la economía sumergida, en aquellos casos donde los controles horarios y la monitorización por parte de la Inspección no hagan posible sustituir la masa de horas ordinarias faltantes por ex-

traordinarias», advierten en una nota técnica a la que ha tenido acceso ABC. «El resultado final no será bueno para nadie», remacha Fernando Santiago.

Golpe a las subcontratadas

En este sentido, otro de los elementos que denuncia el tejido empresarial en sus diferentes ramas de actividad es el efecto que tendrá la regulación sobre las compañías subcontratadas con la Administración Pública. Desde 2015, con la desindexación del IPC de los contratos públicos se impide repercutir el alza eventual de costes en el precio del servicio prestado, es decir, se prohíbe a las empresas elevar el coste repercutido en sus contratos con el sector público. Cabe recordar que la mayoría de las adjudicaciones tienen periodos de despliegue plurianual, quedando sujetas a las condiciones presupuestarias establecidas en el momento de la firma.

Algo que ya han advertido desde la CEOE en la última reunión a tres para negociar las condiciones de la reducción de jornada, en la que reclamaron al Ejecutivo una sensibilidad especial con estas compañías. Ya que se daría la casuística de que si se aprueban las 37,5 horas semanales sin periodo transitorio ni singularidad sectorial, o por tamaño de la empresa o por la naturaleza del contratante, muchas de las empresas en las que la Administración es su principal cliente asumirían la totalidad del aumento de costes asociado a la recorte horario sin merma salarial, pero sin poder realizar ninguna manobra de compensación repercutiendo el mayor coste en el precio del servicio.

Por ejemplo, uno de los sectores más vinculados con la Administración es el de la limpieza. «El servicio al sector público tiene un peso sustancial en el balance de las compañías», explica a ABC el presidente de Aspel, Juan Ignacio Beltrán, señalando que para este sector el golpe sería severo precisamente por el exíguo margen de maniobra que deja la contratación pública. Así, partiendo de la demanda de un mayor periodo transitorio, «otra medida paliativa del desastroso impacto sería que las empresas que participan en la licitación pública y por tanto contratan con la Administración puedan repercutir el incremento de costes», señala Beltrán.



La tribuna

NUESTRO MUNDO ES EL MUNDO | Joan Tapia

Yolanda, Sánchez y Garamendi

La ley de las 37,5 horas, aprobada sin acuerdo con la CEOE, podría naufragar en el Congreso y sería un duro varapalo para el Gobierno

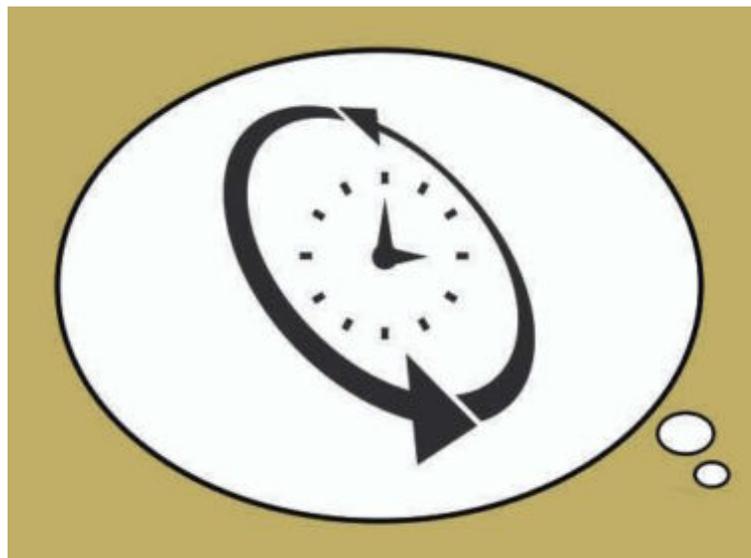
Cuando Sánchez logró la investidura, un dirigente de una patronal catalana (no Foment) me expresó su satisfacción: «Necesitábamos un Gobierno y seguir normalizando Catalunya, es positivo». Le inquirí por el pacto entre el PSOE y Sumar sobre la reducción de la jornada laboral de las 40 horas del Estatuto de los Trabajadores de 1983 a las 37,5 en el 2025. Sonrió: «Vale, es un acuerdo para la galería que no podrá implementarse. Ni Junts ni el PNV lo votarían, porque en Catalunya y Euskadi hay muchas pymes que saldrían perjudicadas».

Hoy, en muchos países, las coaliciones de Gobierno son un crujir de dientes. Ahí está Francia, tras la derrota del domingo de Le Pen. E incluso la virtuosa Alemania, donde el tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales lo tiene cuesta arriba. Pero la mayoría (?) de Sánchez es la más rocambolesca de Europa. Y quizá no tanto por sus aliados, sino por el propio socio de Gobierno.

Sumar, electoralmente, no suma –Galicia, Euskadi, Catalunya, europeas– y Yolanda Díaz, que parecía que se iba a comer el mundo, necesita reafirmarse. Y ha creído que las 37,5 horas semanales serían un buen reconstituyente.

Pero la medicina se le puede indigestar. Porque, de entrada, el Gobierno lo planteó como compatible y fruto del diálogo social. Y Yolanda, tras las descalificaciones a bastantes empresarios, ya no tiene la credibilidad de cuando la reforma laboral. Ahora, tras las últimas refriegas y los aumentos no pactados del salario mínimo, los empresarios la respetan menos y desconfían mucho más. Y pese a que la economía tira –el paraguas de Sánchez–, pasar de a las 37,5 horas en dos años tiene costes. Y los costes –como mínimo– se discuten duro y se negocian.

No lo ha entendido así Yolanda Díaz, que hasta la pasada semana –prepotente– reñía a los empresarios y amenazaba con tirar adelante la ley. Pero las cosas son complejas. La jornada laboral –fruto de la negociación colectiva– ya no es en ningún sector de 40 horas, aunque en algunos (hostelería, 39,4; comercio, 39,1 y agrario, 39) está muy cerca. Seguramente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exagera cuando dice que las 37,5 horas sin reducción de salario sería como regalar –pagando las empre-



sas – 12 días de vacaciones. Pero lo cierto es que no tanto en las grandes empresas, pero sí en sectores intensivos en manos de obra y en muchas pymes (y empresas poco rentables, que deben seguir para que no suba el paro) sería un pellizco o un golpe a sus cuentas de resultados.

Por eso, los empresarios se resisten y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuevas, en su asamblea y con presencia de Isabel Díaz Ayuso, atacó al Gobierno, diciendo incluso que va contra la economía de libre mercado. Más cauto está Garamendi, que argumenta que firmó un acuerdo salarial con los sindicatos de 2023 a 2025 que no contemplaba la reducción de jornada fuera de lo que se pactara en los convenios. Y la Pimec catalana –que no está en la órbita de la CEOE– también está enfurecida contra las 37,5 horas.

El Gobierno ha tomado nota. Así, el siempre discreto ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo la semana pasada en Japón (y en japonés) que había que dar un margen de flexibilidad a la reducción de jornada. Sea cual sea la fuerza de

Cuerpo en el Gobierno, lo cierto es que Yolanda Díaz ha suavizado su posición y ahora tiene menos prisa y se abre a dialogar más.

El fondo de la cuestión es el de mi citado interlocutor. El PNV y Junts ya han votado en el Congreso una resolución instando al Gobierno a no legislar en esta materia sin el consenso empresarial. Luego, si Cuerpo pintara poco y el Gobierno aprobara las 37,5 horas unilateralmente, lo más probable es que la ley fuera tumbada en el Congreso, sumando el PNV y Junts sus votos al PP. Y esto es algo que conllevaría el fin del Gobierno de Sánchez.

¿Cómo contentar a Yolanda Díaz sin dañar la economía, deteriorar más el clima empresarial y evitar que el PNV y Junts voten contra el Gobierno para cuidar a las pymes? Ese es el sudoku que tendrá Sánchez –y ni mucho menos el menor– a la vuelta de vacaciones. Sánchez Llibre, el presidente de Foment, que fue un sutil político demócristiano, vigila y –aunque no están a partir un piñón– susurra a Garamendi: sé suave, pero no cedas, tenemos las de ganar. ■

Junts y el PNV ya han votado una resolución para que la reducción de jornada no se apruebe fuera del diálogo social y sin contar con los empresarios



Joan Tapia es presidente el Comité Editorial de EL PERIÓDICO



11 Julio, 2024

Díaz se reúne con empresas del Ibex para contrarrestar a Garamendi

La ministra busca apoyarse en grandes empresarios para recortar la jornada

Patricia Arriola MADRID.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se está citando con empresas del Ibex-35 para conocer cómo organizan la jornada de trabajo en las grandes firmas del país que, por supuesto, están bajo el amparo de CEOE. Con esta maniobra, Díaz busca presionar al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, para reducir la duración máxima de la jornada laboral a través de algunas de las sociedades con mayor fuerza dentro de la Confederación.

El pasado martes fue el turno de la empresa Telefónica, representada por su CEO Ángel Vilá y de Mapfre, con su presidente, Antonio Huertas, con los que Díaz puso sobre la mesa su propuesta acerca del recorte de horas de trabajo, después de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales afirmara que se mantiene en la negociación y valorará la propuesta del Gobierno. Las grandes empresas, por lo general, ya trabajan menos de las 37,5 horas semanales que se marca como objetivo Díaz.

Ambas empresas dieron a conocer a la vicepresidenta del Gobierno los modelos en materia laboral de las compañías. En el marco de que Telefónica y Mapfre, ambas han implementado recortes de horas de trabajo para sus empleados.

En esta cita, la vicepresidenta cuestionó a Vilá y a Huertas por la fórmula para que sus compañías cerraran acuerdos con los representantes de sus trabajadores acerca de la reducción de jornada a través de la negociación colectiva, y cómo lograron implementar sus modelos. Por el poco tiempo pactado para cada reunión –una hora escasa–, la ministra se enfocó en escuchar y



La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EUROPA PRESS

SEAT, Telefónica, Mapfre y Santander son las empresas con las que Díaz ya se ha reunido

evitó exponer su propio proyecto de disminución de horas.

Podemos mencionar que en el caso de la operadora, tras llegar a acuerdos con los sindicatos en ene-

ro de este año, ha puesto en marcha desde el 1 de julio la reducción paulatina de la jornada laboral para sus empleados a 37 horas. Su convenio establece un recorte de media hora cada año, y plantea llegar a las 36 semanales en enero del 2026.

Por parte de la aseguradora, el presidente de Mapfre habría explicado también de que forma su compañía logró pasar de las 1.700 horas laborales anuales que tenía instauradas en 2005 a las 1.665 horas que manejan actualmente (37,3 horas semanales). Un modelo que ha

sido implementado en 20 años de forma gradual.

Éstas no son las primeras ni las últimas reuniones de Díaz con grandes empresas, en el contexto en que el Gobierno busca llegar a un acuerdo con las patronales para sacar adelante la reducción de la jornada. En lo que va de la semana, la vicepresidenta, se reunió con el CEO de SEAT y Cupra, Wayne Griffiths, “para valorar los beneficios de la reducción de la jornada laboral y la necesidad de implementar más infraestructura para mejorar el acce-

so al coche eléctrico”, precisó a través de su cuenta de X.

La ministra, tiene previsto continuar sus encuentros con los empresarios empresarial. Sin ir más lejos, ayer mismo se reunió con el vicepresidente del Banco Santander, José Antonio Álvarez.

En diálogo abierto con CEOE

Tras la última mesa de diálogo entre el departamento de Trabajo y el sector empresarial, Díaz reconoció un acercamiento de posturas con la CEOE. Sobre la reducción de las horas laborales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señaló que “no puede adelantar detalles de su conversación con el Gobierno cuando se encuentra negociando”. No obstante, cuestionó que aplicar la medida sin merma salarial “equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por la empresa”.

“Desde el Ministerio de Trabajo hemos puesto otra propuesta más encima de la mesa, y he de decirles que, por primera vez desde enero, la patronal española entró en la negociación”, aseveró Díaz.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que la próxima reunión sobre la reducción de jornada con agentes sociales tendrá lugar el próximo miércoles 17 de julio.

Así lo ha avanzado tras reconocer un acercamiento de posturas entre CEOE y el Gobierno en relación con la reducción de la jornada laboral, después de que Trabajo presentara una nueva propuesta a la patronal en la reunión mantenida el lunes con agentes sociales.

En la misma línea que semanas atrás, la vicepresidenta ratificó: “No me levanto nunca de una mesa. Por tanto, estoy convencida de que hay posibilidad de acuerdo”.

Las reuniones con grandes empresas que han aplicado reducciones de jornada laboral a sus empleados, exponen que Yolanda Díaz busca conocer cuál es la clave para sacar adelante lo que hoy es un anteproyecto de Ley del Gobierno que propone que para el año 2025, la jornada máxima laboral sea de 37,5 horas a la semana.

Finalmente, la también ministra de Economía Social expresó que “hay margen para el acuerdo”.



El reto de aumentar la productividad

Por Grupo de Reflexión de Ametic. Las economías avanzadas siguen logrando mejoras que España no alcanza

Como apunta el informe del Observatorio de Productividad y la Competitividad en España (OPCE) 2023 *El comportamiento de la productividad en España (1995-2022)*, España destaca en el panorama internacional por la mayor gravedad de sus problemas de productividad, tanto del trabajo como del capital, y especialmente de la productividad total de los factores (PTF).

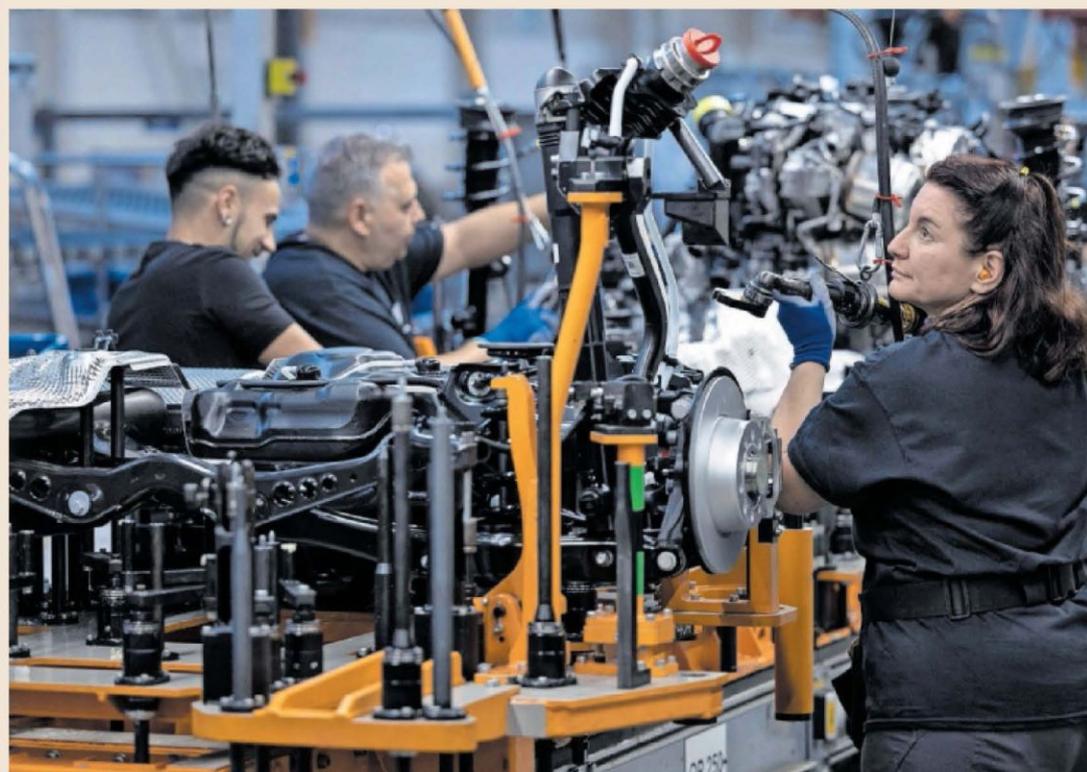
Analizando los datos de las últimas décadas, el primer informe del OPCE explica que, en España, entre 2000 y 2022 la productividad del capital cayó en promedio a una tasa del 1,2% anual. En cambio, la productividad del trabajo creció ligeramente, a una media anual del 0,7%, comparado con el 1,1% anual de crecimiento en la UE en su conjunto. Finalmente, la PTF cayó un 7,3%, mientras que en Alemania creció un 11,8%.

La productividad del trabajo y la del capital miden la eficiencia con la que se usan los recursos humanos y las inversiones para producir bienes y servicios. Concretamente, la del trabajo mide la eficiencia con la que el trabajo aportado se combina con otros factores para producir bienes o servicios, y suele calcularse dividiendo el número de horas trabajadas por el PIB. La del capital mide, por su parte, la eficiencia con la que se utiliza el stock de capital neto de un país para la producción de bienes y servicios, cuánta producción se genera en relación con la inversión en capital. En cambio, la PTF mide la eficiencia con la que trabajo y el capital se combinan para generar producción.

Dos empresas con los mismos trabajadores e inversiones similares pueden tener ingresos y beneficios muy distintos. Una de las empresas puede haber aplicado tecnologías más avanzadas en sus procesos de producción, o tal vez sus trabajadores y directivos tienen mejor formación, lo que los ha llevado a organizarse de una manera más eficiente. De la misma manera, dos países pueden tener el mismo capital invertido (con los mismos recursos naturales), y el mismo número de trabajadores, que trabajan las mismas horas cada año.

Sin embargo, estos dos países pueden tener PIB muy diferentes. El motivo de la diferencia radica en la PTF. Aunque normalmente la PTF se asocia al uso de la tecnología, está influenciada también por el tipo de inversiones en maquinaria e infraestructuras, por la formación de los trabajadores y de los empresarios, por el entorno regulatorio e institucional y por la gestión de los recursos naturales y la gestión ambiental. Según el OPCE, entre 1995 y 2020 la PTF disminuyó en España a una tasa anual media del -0,48% mientras que la mayoría del resto de países tienen tasas anuales medias positivas: Alemania, del 0,62%, y EE UU, del 0,67%.

Sin embargo, el producto interior bruto de España creció en el mismo periodo. Y lo hizo porque hemos incorporado más trabajadores. Además, la productividad laboral también ha aumentado un poco. Pero como la productividad del capital



Trabajadores de la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona). ALBERT GARCIA



España es uno de los tres países de la zona euro que todavía no tiene un consejo de la productividad; vamos tarde

así como la PTF vienen retrocediendo desde hace décadas y las economías avanzadas siguen logrando mejoras en PTF que España no consigue, la renta por habitante se mantiene distanciada de la de estas economías avanzadas.

Según el primer informe del OPCE 2023, el bum inmobiliario de principios de siglo explica en buena medida la caída de la productividad del capital y de la PTF. Las inversiones en viviendas, naves, locales comerciales o despachos no utilizados son inversiones poco productivas. Estos excesos de capacidad pesan como una losa en los cálculos de productividad, y lo harán durante décadas. Según el censo 2021 del INE las viviendas vacías y las de uso esporádico suponen el 27,4% de los 26,6 millones de viviendas censadas. Aunque el exceso de capacidad asociado a las viviendas vacías o parcialmente utilizadas está presente en todos los países, España es uno de los países con mayor exceso de oferta y menor aprovechamiento del capital residencial.

Pero los problemas de productividad en España no son uniformes. En cuanto a las comunidades autónomas, y tal como se explica en el documento del Cercle d'Economia *Evolución de la productividad en Europa: una mirada regional*, solo el País Vasco presenta un nivel de

productividad relativamente elevado y se acerca al de las regiones europeas más productivas. Incluso el crecimiento de la productividad de las economías catalana y madrileña durante los últimos años ha sido muy bajo. La productividad de estas regiones está cada vez más distanciada de la de las regiones europeas más productivas.

Por último, y dada la importancia que la productividad tiene en el crecimiento económico, el Consejo Europeo publicó en 2016 una recomendación para la creación de los consejos nacionales de productividad. Desde entonces, la mayoría de los países de la Unión Europea (y de otras partes del mundo) han constituido sus consejos nacionales de productividad. En España no ha sido hasta marzo de 2024 que se ha presentado un proyecto de real decreto por el que se crea el Consejo de la Productividad de España con el objetivo de fomentar la aplicación de reformas a nivel nacional que incidan positivamente en la productividad. España es actualmente uno de los tres países de la zona euro que todavía no tiene un consejo de la productividad. Vamos tarde.

En nuestro próximo artículo estudiaremos las causas del lento aumento de la productividad del trabajo y su relación con el modelo productivo.



11 Julio, 2024

La mayoría de los empleados no consigue desconectar del trabajo en casa

D. MARCHENA Barcelona

En países como Francia cada vez más sindicatos denuncian la *correa digital*, ese hilo invisible que mantiene a los trabajadores *atados* a su empresa una vez acaban la jornada laboral. En España las leyes garantizan la desconexión digital, ¿pero se cumplen? Una reciente encuesta de una plataforma de empleo sostiene que no. Más de la mitad de los trabajadores catalanes no logra desconectar del trabajo en casa.

A esta conclusión llega una investigación de Infojobs gracias a un cuestionario en el que han participado 4.680 personas. Las respuestas a las preguntas exigían un mínimo de 15 minutos y fueron realizadas por una muestra poblacional con una distribución representativa de las personas de entre 16 y 65 años. El 55% de los catalanes con empleo no desconecta totalmente cuando acaban sus obligaciones laborales.

El 34% de los encuestados reconoce que su mente sigue ocupada por las tareas que han quedado pendientes. Un 15% admite que sigue atento por si surge algún imprevisto o problema que deba solucionar, aunque haya concluido su jornada. Un 6% sostiene que siempre está pendiente del trabajo, a pesar de que no haya nada urgente. Son datos que se refieren a Catalunya, aunque son muy parecidos a los del resto del país.

El 70% de los trabajadores en Catalunya (un 71% en el conjunto de España) asegura que no logra desconectar del trabajo fuera de la jornada laboral. Y, a pesar de que conocen la importancia de la desconexión digital (tanto para su propia salud como para su vida familiar y equilibrio emocional) no pueden evitar responder a llamadas, mensajes o correos electrónicos del trabajo cuando debieran estar en su tiempo libre.●

**JORNADA LABORAL**

La patronal debería entrar en el siglo XXI

**Miguel Fdez.-Palacios
Gordon**

MADRID

Mientras las patronales CEOE y Cepyme, de mentalidad arcaica, se oponen a rebajar la semana laboral de 40 a 37,5 horas –el PP no sabe, no contesta–, en Suecia, el Reino Unido o Bélgica, países que han testado con agrado empresarial la semana de cuatro días, han constatando que incrementar el asueto y promover la reconciliación familiar rebaja el estrés y obtiene una mejor salud, menor absentismo y un incremento de la productividad.

Hace meses que en España varias compañías ensayan la semana laboral de cuatro días con resultados notablemente positivos. Ahora que nuestra economía está fuerte es el momento de progresar. Y como tantas otras medidas que este Gobierno ha llevado a cabo, no traerá el apocalipsis como vaticina siempre la derecha agorera, más bien todo lo contrario. La patronal debería entrar en el siglo XXI. ■



11 Julio, 2024



Fachada de la comisaría de la Policía Municipal de Villaverde. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

SEGURIDAD EN VILLAVERDE

La comisaría de los golpes de calor

Fuentes sindicales de la Policía madrileña denuncian que los aparatos de aire acondicionado no tienen la suficiente potencia. El Ayuntamiento promete una reforma

ANTONIO BLANCO MADRID
 Dos agentes de la Policía Municipal de Madrid, pertenecientes al distrito de Villaverde, sufrieron sendos golpes de calor en los barracones de la comisaría. Los desmayos se produjeron hace dos semanas durante su jornada laboral. El sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) recuerda que los barracones «no son la calle» y que son «unidades policiales». La comisaría se sitúa en la Carretera de Carabanchel a Villaverde, en las proximidades de la estación de tren Puente de Alcocer.

El secretario general de UPM, Jaime Johnson, denuncia a GRAN MADRID que los agentes viven una situación «insostenible». «Y ahora con el calor, peor aún», añade. El sindicalista indica que los policías utilizan los barracones a modo de vestuario, para que se cambien, como oficinas, o a la hora de «pasar lista». Sostiene que la comisaría del citado distrito madrileño está compuesta por casi 200 agentes, repartidos en tres turnos: mañana, tarde y noche. Desde UPM subrayan que los dos agentes están bien y que no «su-

frieron baja». Los barracones están compuestos de chapa metálica y debido a ello el calor se acumula en el interior, según señala el sindicato. Piden que se mantengan «unas mínimas condiciones de seguridad y salubridad» y tachan la situación de «recurrente», debido a las altas temperaturas que soportan y la carencia de potencia de los aparatos de aire. Por otro lado, el sindicato lamenta, en una conversación telefónica con este periódico, que no se haya construido la nueva comisaría que les prometió el Ayunta-

miento de Madrid «desde hace años». Apuntan que las dependencias policiales actuales están «obsoletas». «La de Villa de Vallecas ya está hecha y falta que trasladen a los agentes, pero la nuestra no», apostillan. «Uno de nuestros delegados de Personal con formación en Prevención de Riesgos Laborales va a realizar un informe urgente a las instancias que nuestro gabinete jurídico nos aconseje para que esta situación se revierta de una vez», reza un comunicado del sindicato. «A día de hoy no hay voluntad de que tengamos

instalaciones dignas en algún distrito», concluye el comunicado sindical de UPM.

Por su parte, el Consistorio madrileño recalca a EL MUNDO que la construcción de la nueva comisaría se encasilla en un plan que prevé equipar a la capital con hasta 96 infraestructuras, comprendidas entre los años 2019 y 2027. De ese centenar, 11 de ellas son comisarías de la Policía Municipal madrileña y ocho ya están completadas. «En la actualidad se está redactando el proyecto de esa infraestructura. Es decir, el 75% de los equipamientos previstos para Policía Municipal ya están finalizados a tres años de que finalice el plan», agrega el Ayuntamiento madrileño.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional, Inmaculada Sanz, dijo, en una rueda de prensa, que desde el organismo municipal Madrid Salud, dependiente de la edil, se «seguirá editando un protocolo para la protección del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos en periodos de altas temperaturas». «Llega a todo el personal municipal que trabaja en la vía pública, además de informar a los centenares de colectivos e informadores locales (Policía Municipal, EMT Madrid, hostelería, sector turístico, centros de mayores, etc.)» de la situación climática adversa «como hace desde 2005», precisa el comunicado.

En este sentido, los agentes, desde el sindicato CSIF, enviaron también una carta a la vicealcaldesa madrileña por la «suspensión de descansos semanales para cubrir el evento programado de MAD0», que acogió el pasado fin de semana la capital. La misiva fue también remitida al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, y al comisario general de la policía madrileña, Oskar de Santos Tapia.

«Aquellos que velan por que estos eventos se puedan realizar con todas las condiciones de seguridad y viabilidad también tienen derecho a que se respete su conciliación, su actividad laboral y su seguridad personal», reza el comunicado, firmado por el secretario general, Vicente Dimas. El Orgullo se saldó con más de 200 detenidos.

SEGURIDAD SOCIAL



11 Julio, 2024



El autobús informativo del ingreso mínimo a su paso por el Palacio de Vistalegre (Madrid). EFE

El ingreso mínimo apenas llega al 36% de los potenciales beneficiarios

La AIReF constata que se ha producido un «estancamiento»

DANIEL VIAÑA MADRID

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) apenas llega a un 36% de los potenciales beneficiarios. A algo más de 340.000 hogares, según certifica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ayer publicó su tercera opinión sobre el IMV.

La cifra supone un incremento del 20% respecto al año anterior, pero la AIReF subraya que las ci-

fras son insuficientes. «Hay margen de mejora, vemos un estancamiento en su implantación», explicó la presidenta del organismo, Cristina Herrero, durante la presentación del documento. «Desde sus inicios, el IMV ha elevado el número de hogares protegidos por una prestación de último recurso y llega a colectivos muy vulnerables, pero hay margen para mejo-

rar su diseño, despliegue y gestión», inciden en la AIReF.

Además, la tasa de *non take-up*, que son las personas que teniendo derecho a la prestación no lo solicitan, está en el 56%. La AIReF ha analizado el efecto de las rentas mínimas en esta tasa y evidencia que cinco puntos porcentuales de ese 56% se corresponden con hogares que se encuentran percibiendo ren-

tas mínimas autonómicas. «Esta proporción es más elevada en las comunidades autónomas donde el trasvase de beneficiarios al IMV ha sido más limitado, como Cataluña, Asturias y Comunidad Valenciana», explica el organismo.

En este contexto, la Autoridad Fiscal propuso «acercar las prestaciones al ciudadano utilizando esquemas de concesión de oficio». Desde Seguridad Social, sin embargo, ya rechazaron ayer esta posibilidad afirmando que es «inviable y no recomendable».

La opinión de la AIReF, además, venía precedida por la polémica que se produjo el año pasado con el Ministerio de Seguridad Social que entonces dirigía José Luis Escrivá, precisamente ex presidente de la Autoridad Fiscal. En el documento de 2023, el organismo redujo a la mitad el número de hogares beneficiarios respecto a los que ofrecía Seguridad Social. Y el motivo de la abultada diferencia estaba en que Escrivá daba datos acumulados, desde la entrada en vigor del IMV, e incluyendo a hogares que ya no eran beneficiarios.

Con la llegada de Elma Saiz al Ministerio la metodología cambió. Ahora sólo se ofrecen los beneficiarios activos, aunque a las cifras del IMV desde el Gobierno se le suman las del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI). Esta ayuda no es propiamente un IMV, pero en la AIReF reconocen que ambas prestaciones se encuadran dentro de la misma normativa y que han cambiado su metodología para adaptarse a la que emplea Seguridad Social. «Con los datos desagregados, nuestras cifras son similares a las del Ministerio», señalan en la AIReF.

INMIGRACION Y EMIGRACION



11 Julio, 2024

ABASCAL CONSUMA EL ÓRDAGO CONTRA EL REPARTO DE MENORES

Los barones del PP activan planes para gobernar sin Vox

El partido de Abascal da por «rotos» los pactos de gobierno autonómicos y convoca de urgencia a su dirección

Extremadura, Castilla y León, Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana ya han previsto los posibles cambios

POR JUANMA LAMET Y MARISA CRUZ [Páginas 8 a 10](#)

11 Julio, 2024



Los barones activan cambios tras dar Vox por rotos los pactos

Extremadura, C. Valenciana, Murcia, Aragón y Castilla y León ya saben a quién nombrarán y hasta qué consejerías amortizarán

JUANMA LAMET MADRID
Si el órdago de Santiago Abascal eclipsó el drama humanitario que vive Canarias, no digamos ya la crisis política que se avecina después de que Vox consumase anoche, finalmente, su amenaza y diera por rotos sus cinco pactos autonómicos con el PP: Castilla y León, Murcia, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana. Los cinco estaban en el aire en los últimos días, de manera que los barones *populares* ya han dejado preparados sus planes alternativos, según ha sabido EL MUNDO. Ya saben quiénes serán los sustitutos de los consejeros que dimitirían, e incluso se plantean reorganizar el organigrama y amortizar alguna consejería para dar un mensaje de austeridad. Tenían que prevenir y estar preparados para el escenario principal, y es lo que hicieron antes de que anoche, a las 22,35 horas, Vox diera por hecho el portazo.

Aunque algunos de ellos daban ya por hecho el cisma y otros no tanto, la cuenta atrás de Santiago Abascal al PP expiró justo después de que las comunidades concernidas votasen a favor de acoger más menores migrantes en sus territorios (como todas, menos Cataluña, que se abstuvo) en la Conferencia Sectorial de Tenerife. Como siempre habían hecho, hasta ahora, y como está comprometido desde 2022. O sea, hicieron lo que para Vox significaba la «ruptura» de las coaliciones. Y se acabó lo que se daba, para ambos.

La casuística es distinta en cada comunidad, pero varios barones habían hablado ya con la dirección nacional de Vox antes de la ruptura y daban ya por «casi casi» rotas sus coaliciones. En Castilla y León y Aragón, el divorcio estaba ayer descontado y ya se había trazado el plan B, según fuentes de ambas baronías. Eso incluye un cambio de cromos en las consejerías, e incluso amortizar alguna, toda vez que el PP se libraría de la losa de las «cuotas» de Vox. En Extremadura, casi igual, aunque nadie de la dirección nacional

de Vox se puso en contacto con María Guardiola antes del comunicado que daba por «rotos» los pactos. En la Comunidad Valenciana, ninguno de los dos socios quería romper, pero en el PP reconocían que «los vicepresidentes de Vox harán lo que les diga la dirección nacional», porque «son soldados rasos». Y eso dejó a Vicente Barreira a merced de la sede de Bambú.

MURCIA

¿Y Murcia? El movimiento diferencial de Fernando López Miras abrió una espita, aunque al cierre de esta edición no había habido aún interlocución directa entre ambas formaciones sobre la ruptura. Lo que hizo ayer el Gobierno murciano es negarse a acoger a nin-

«Vox se inmola porque tiene mucho miedo a Alivise», cree el PP

Los presidentes: «Es un error, pero nos quitamos los 'numeritos'»

gún menor migrante más que los que estaban pendientes de reubicar. Y, de hecho, va a solicitar también la solidaridad del resto de autonomías—menos Canarias, claro—para desatascar la saturación de su sistema de acogida, que actualmente está «al 200%» y es «el peor de la Península», apuntan.

Vox valoró este movimiento murciano, pero la suerte estaba echada cuando Abascal rompió todos los gobiernos de coalición. Habría sido muy extraño que mantuviera unos y otros no, sobre todo porque la postura de las CCAA del PP es común e inequívoca: «Sí a la solidaridad» porque «los menores están por encima de la política».

De hecho, todas fueron ayer «a una» a la Conferencia Sectorial de Juventud de Tenerife. «En bloque», pidieron una Conferencia de Presidentes y que Sánchez declare la emergencia migratoria y presiones a Europa para desplegar Frontex (la agencia de inmigración de la UE). Además, todos los barones consultados por este diario coinciden en una realidad palmaria: en ninguno de los programas de gobierno que pactaron con Vox dice que se opongan a acoger a menores migrantes, como ya hicieron en los años anteriores.

EXTREMADURA

Por ejemplo, fuentes de la Junta de Extremadura aseguran que «en el pacto de Gobierno no hay nada de esto, y nosotros nos ceñimos al pacto». «Vox tiene muy difícil dar marcha atrás y no romper», añaden. ¿Qué haría Guardiola? Cambiar al consejero de Medio Rural y Gestión de Incendios, sin más. Y seguir gobernando siguiendo la hoja de ruta que tenía. Y a eso Vox no se podría negar en las votaciones parlamentarias si antes lo apoyaba.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, fue categórico a la hora de defender la acogida de migrantes menores de edad, aunque por ahora sólo los del reparto «ordinario» y no los más de 2,500 que Canarias necesita derivar para aliviar el «colapso» que vive. Y que amenaza con agravarse, ya que espera recibir unos 11.000 menores más en los próximos meses.

Feijóo ha «compartido reflexiones» con los barones, pero les ha dado libertad de acción, como siempre, explican en su entorno. También la secretaria general de los *populares*, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria del ramo, Ana Alós, que es quien ha co-ordinado a los consejeros sociales de las baronías *populares*. «Todos quieren ayudar a Canarias y a los menores, su compromiso es absoluto», explican en el PP, pero dentro de «su capacidad». O sea, todos están a favor de acoger menores, pero no to-



Feijóo y Marimar Blanco, ayer en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua. PP

dos—ni mucho menos—cambiarían la Ley de Extranjería para destacar el embudo humanitario canario. ¿Qué pasará entonces con esos más de 2,500 menores que Canarias debe derivar y que el PP de Canarias apoya que se repartan en base a una nueva normativa? Ésa es la gran pregunta. «Que el Gobierno ponga recursos suficientes y gestione», apuntan en el equipo social del PP.

CASTILLA Y LEÓN

En la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco creen que la ruptura con Vox no descompensará demasiado la legislatura, porque tienen unos Presupuestos recientes que podrán prorrogar. Y, además, en el PP calculan que habrá «varios» dirigentes de Vox que sopesarán quedarse en el Gobierno. Incluso un par de consejeros. «Allá Vox si rompe. Quedaría un año



11 Julio, 2024



VOX CONVOCA A LA DIRECCIÓN

REUNIÓN DE URGENCIA. Tras conocerse el respaldo del PP a la distribución de menores migrantes, Vox dio por rotos los pactos regionales con los 'populares' y convocó de urgencia a su dirección para esta tarde, cuando decidirá los «próximos pasos» y si abandona los cinco ejecutivos.

LLAMADA DE FEIJÓO. «Los consejeros del PP han votado sí porque Feijóo se lo ha ordenado, dentro de su debilidad y afán por arrodillarse ante Sánchez», acusó Vox al PP en un duro comunicado en el que apuntó a que el líder 'popular' telefonó ayer a los barones uno por uno para «obligarles» a votar a favor del reparto.

ACERCAMIENTO A SÁNCHEZ. Vox, tras días amagando con romper con el PP, apunta a un acercamiento de Feijóo a Sánchez con este nuevo acuerdo: «Confirma dónde y con quién quiere estar». «Es el señor Feijóo el que ha roto los gobiernos».

«VIOLACIONES, ROBOS Y MACHETAZOS». En su escrito, Vox vuelve a relacionar la crisis migratoria que padece Canarias con un aumento de la inseguridad en las calles: «Vox no será cómplice de las violaciones, los robos y los machetazos». **V. COLL**

y medio de legislatura, se retratarían en las Cortes votando con el PSOE y muchos dirigentes de Vox no se irían del Gobierno», apuntaron en privado fuentes de la Junta por la mañana. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, fue el único que puso públicamente a disposición del partido su cargo si se formalizaba la distribución de los 21 menores migrantes que Mañueco ya había apuntado

que acogería, por ahora. Eso se consumó por la noche, de manera que se le da como dimisionario, de facto.

ARAGÓN
 En Aragón, fuentes del PP aseguran que «Vox se inmola porque tiene mucho miedo a Alvisé», en referencia a la irrupción en la extrema derecha de Se Acabó La Fiesta, con un discurso muy duro contra la inmigración. «Vox

se tira al monte porque sabe que el cabreo no va a cesar, y antepone los intereses de partido a la institucionalidad y la estabilidad de una autonomía», apuntan las mismas fuentes cercanas a Azcón, que constatan una «pinza» de PSOE y Abascal.

Sea como fuere, lo cierto es que al consumir Vox su amenaza, dejará de gobernar al 24% de la población española. Uno de cada cuatro ciudadanos.

Algunos de los barones consultados por este diario respirarán aliviados, a pesar de la inestabilidad que generará la ruptura de los pactos. «Es un error, pero nos quitamos los numeritos», dice uno. «Si 20 menores por CCAA desnivelan todo el sistema de protección, significa que Vox da un salto al vacío institucional», apunta otro.

Este trance es también una prueba del algodón para el liderazgo de

Feijóo. «Con 62 años, con cuatro mayorías absolutas, tras haber ganado al PSOE todas las elecciones nacionales en las que han competido desde 2022», las posibilidades de que Feijóo «renuncie a sus convicciones por las amenazas de nadie son iguales a cero», solemnizaron en Génova. «Y su apuesta por la solidaridad entre personas y territorios es inquebrantable», zanjaron las mismas fuentes.



El PP acepta el reparto de 400 menores y exige al Gobierno que declare la crisis migratoria

Pide más fondos por el colapso de las oficinas de asilo y que se comprometa a contribuir más allá del primer año de acogida, mientras Cataluña se abstiene

EDITORIAL Y PÁGINAS 14-15



Imagen de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada ayer en Santa Cruz de Tenerife

FOTO: RAMÓN DE LA ROCHA / EFE



El PP se planta ante Vox y acepta el reparto de 400 menores inmigrantes

- ▶ Solo Cataluña se abstiene del acuerdo, que sale adelante con el apoyo de las regiones gobernadas por los populares
- ▶ El rechazo generalizado a la reforma de la ley de Extranjería hace difícil que el Congreso la apruebe si no hay cambios

LA INMIGRACIÓN, EN CIFRAS

81%

Es el porcentaje de inmigrantes menores no acompañados que acogen a día de hoy todas las comunidades gobernadas por el PP. En total, unos 5.200

156

Son los millones que el Gobierno de Canarias calcula que cuesta anualmente la acogida de los casi 6.000 menores que están actualmente bajo su tutela

11.000

Es la cifra de menores que se estima que puedan llegar a Canarias de aquí a final de año, lo que agravará el problema de la acogida solidaria

Partido Popular, cuyo líder confirmaba este extremo a primera hora de la mañana. «Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Vamos a ser solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor. No se lo que va a hacer Vox, pero nosotros estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado», explicaba Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a Ermua (Vizcaya) para asistir al homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 27 aniversario de su asesinato por parte de ETA, informa Gerard Bono.

Las palabras del presidente del PP dejaban claro el sentido del voto de las doce comunidades que gobiernan los populares –además de Ceuta y Melilla– en el reparto de los 400 menores que esperan destino en Canarias, reforzando su carácter de «partido de Estado» –como indicaban fuentes del PP– y en contraposición a Vox, su socio de gobierno en cinco de esas regiones, que tras acabar la reunión dio por rotas esas coaliciones y convocó para hoy de urgencia a su Comité Ejecutivo Nacional.

Una reunión que comenzó en hora y a la que el Ejecutivo llevó una pro-

EMILIO V. ESCUDERO
 MADRID

El mismo día que los consejeros de las comunidades autónomas se reunían en Santa Cruz de Tenerife para desatascar el reparto de menores inmigrantes a la península, varios cayucos y pateras llegaban a las costas canarias con más subsaharianos a bordo. Otro puñado de vidas en busca de un futuro mejor. Goteo incesante que evidenciaba la necesidad de buscar soluciones a un problema que mantiene esta región en situación de emergencia.

Mientras eso ocurría, el Gobierno trataba de allanar el camino del cón-

clave vespertino. Lo hacía con una visita programada a un centro de menores, en el que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), se quedó sola, pues los consejeros del PP decidieron no acompañarla. «No íbamos a contribuir al relato del Gobierno», señalan fuentes del PP.

En realidad, el Ejecutivo solo tenía que ablandar el corazón de Cataluña –la única comunidad que ayer se abstuvo en la votación del acuerdo–, pues la decisión de aceptar el reparto de los 400 inmigrantes menores no acompañados (menas) –la propuesta de 2024 a las comunidades– ya estaba anunciada. Al menos por parte de la mayoría de las regiones, las gobernadas por el



Reunión celebrada ayer en Santa Cruz de Tenerife sobre los menas // EP

puesta poco detallada y alejada de las exigencias de las comunidades del PP. Sobre todo, en el aspecto económico, el caballo de batalla. Porque el principal problema que subyace en todo este asunto no es la negativa de los territorios a acoger a estos inmigrantes, sino la incapacidad de hacerlo en las condiciones adecuadas por la falta de financiación.

Fondo de contingencia

De ahí que la referencia a ese asunto en el borrador de reforma de la ley de Extranjería fuera uno de los caballos de batalla de la reunión. El PP había pedido al Gobierno que detallara la financiación y que especificara que la misma debía asumir toda la tutela de los menores y no solo el primer año tras la acogida. Un extremo que no aparecía en el texto final y que provocó el enfado de las comunidades del PP, reacias a apoyar la reforma cuando llegue al Congreso.

Ahora mismo, el 81% de los menas acogidos están en regiones gobernadas por los populares. Alrededor de 5.200 inmigrantes cuya manutención corre a cargo de los Ejecutivos autonómicos en su mayor parte, porque el Gobierno central solo se hace cargo del primer año. «No es lo mismo que te llegue un chaval de 12 años que de 17 y eso es un factor que se debe tener en cuenta, porque los recursos son los que son y no se puede asumir todo por parte de las autonomías», explica a ABC un barón del PP, cuyo territorio

asume ya una presión migratoria por encima de su capacidad.

No es el único. Según el manifiesto hecho público por las doce autonomías del PP al acabar la reunión, «la mayoría se encuentran en situación técnica de emergencia», por lo que instaron al Gobierno a actuar con premura. En concreto, los populares exigieron que se trabaje para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal actuando en origen. Para ello, entienden que es imprescindible recurrir a la Comisión Europea, para que active la colaboración de Frontex, que ofrece mecanismos de control de fronteras, además de los mecanismos de derivación a países europeos.

A esta petición de ayuda habría que sumar, según los populares, un incremento de recursos personales y económicos para desatascar las oficinas de asilo, además de incrementar la financiación de las comunidades con un fondo de contingencia que palie el déficit crónico que sufren con este fenómeno, que muchas veces es mayor de lo que dicta la realidad de los números. Según explicaban ayer varios de los consejeros, incluido el catalán Carles Campuzano, muchas veces se derivan inmigrantes adultos a la Península que una vez en destino aducen ser menores, por lo que la tutela –inesperada– acaba recayendo en las comunidades. Por ejemplo, de los 1.472 menores que tiene Andalucía en la actualidad, 454 llegaron diciendo que eran adultos. Una triquiñuela que dispara el presupuesto destinado a esta cuestión por parte de los territorios.

Conferencia de presidentes

La reunión amaneció con el Gobierno exponiendo su borrador de reforma de la ley de Extranjería y avanzó lenta, pues casi todas las comunidades tomaron la palabra para expresar su disconformidad con el texto propuesto. Quejas que desembocaron también en exigencias al Ejecutivo, reflejadas en el manifiesto, al que pidieron la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes y la declaración de la emergencia migratoria. «Lo único que pedimos es que cumpla con sus obligaciones. Este problema requiere de políticas de Estado y no de parches», señalan fuentes del PP. Soluciones que pasan por contener la entrada de irregulares, poniendo el foco en los países de origen. Las regiones gobernadas por el PP expusieron también la necesidad de que la acogida solidaria –aceptada como había anunciado Feijóo– fuera de todas, «sin excepciones», en clara referencia a Cataluña, que se abstuvo de la votación, dejando entrever su negativa a asumir más menores en el futuro. De hecho, su consejero dejó claro su voto en contra a la reforma de la ley de Extranjería, con la que el Gobierno quiere instaurar la obligatoriedad de acogimiento. Algo contra lo que la mayoría de territorios se mostraron en contra hasta conocer «la financiación, las condiciones y de qué manera llegarán esas personas y cuánto tiempo pasarán en destino». Solución aplazada para el Gobierno, que solo logró aliviar el problema de manera temporal.

Moncloa quiere asumir el reparto de migrantes sin asegurar recursos

Vox acusa al PP de «romper los pactos de Gobierno» al aceptar la distribución de los 347 menores y convoca hoy a su dirección **P.14 - 15**



11 Julio, 2024

► **Cumbre.** Tras aprobarse la distribución de 347 menores gracias al apoyo del PP, la mayoría de comunidades rechazó la reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno

Moncloa quiere asumir el reparto de migrantes sin asegurar recursos

Javier Gallego. MADRID

El Gobierno ha conseguido poner un «parche» a la crisis migratoria que vive Canarias gracias a que las autonomías del PP han aceptado el reparto de los 347 menores migrantes, aunque va a tener muchos problemas para lograr la reforma de la Ley de Extranjería para evitar que se reproduzcan estas situaciones a futuro. Moncloa va a tener muchos problemas por su debilidad parlamentaria, ya que su socio Junts ya se ha descolgado del todo y ha anunciado su voto en contra, mientras que el PP se muestra muy crítico con las formas y porque se hace sin financiación asegurada por ley, por lo que parece alejado de garantizar su apoyo a la propuesta legislativa. En todo caso, los populares evitan definir aún su posición definitiva.

Tanto el reparto de los 347 menores como la reforma de la Ley de Extranjería se abordaron ayer en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebró en Tenerife y reunió presencialmente a solo ocho de las 19 autonomías que hay en España (Andalucía, Extremadura, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Cataluña). La cumbre estuvo presidida por Fernando Clavijo, presidente canario, y contó con la presencia de dos ministros: Sira Rego y Ángel Víctor Torres.

Los populares ignoran las amenazas de Vox de romper los gobiernos autonómicos y han optado por proyectar «sentido de Estado» con la acogida de forma

«Esto es lo que viene en los próximos meses»

► **El Gobierno de Canarias mostró a los consejeros autonómicos desplazados a Tenerife para participar en la Conferencia Sectorial de Infancia cuál es «la realidad» de los menores de los cayucos y cuál es «la realidad que se viene encima» si no se comparte la acogida. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (CC), y su consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, acompañaron para ello a los representantes autonómicos a un centro de Santa Cruz de Tenerife, uno de los mayores de la red, con 234 chicos. «Tenemos también centros pequeños que están funcionando muy bien, pero evidentemente es en los grandes donde existen las mayores complicaciones, porque son muchos niños para seguir con ellos un programa integral de atención», explicó Candelaria Delgado, que lleva meses advirtiendo de que la red de las islas está sobrepasada y de que van a tener que recurrir a espacios como tiendas de campaña en los puertos.**

voluntaria de los 347 menores migrantes. También es cierto que el contexto obliga al PP a aceptar la acogida de los menores porque gobierna en coalición en Canarias con Coalición Canaria. Frente a los intentos del PSOE por equiparar a PP y Vox con la cuestión migratoria, los populares reivindican que sus autonomías ya gestionan al 80% de los menores no acompañados, una cifra que, en términos absolutos, se traduce en 5.000 jóvenes. El partido de Alberto Núñez Feijóo lo que está reclamando es que el Gobierno, que tiene las competencias exclusivas en materia migratoria, haga esfuerzos y tome medidas porque las autonomías ya están al límite de sus capacidades.

«El Gobierno utiliza la inmigración. Nosotros ni cedemos al chantaje del Gobierno ni a las amenazas de Vox», señalan fuentes populares, en referencia a la actitud de Moncloa contra sus autonomías y a los avisos de Vox a sus gobiernos autonómicos (Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Extremadura).

En este sentido, la propia proposición de ley que ha impulsado el Gobierno negociando con Coalición Canaria para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y cambiar la regulación de la acogida de los menores migrantes denota la voluntad que tiene Moncloa por sacudirse la carpeta migratoria. La exposición de motivos hace reiteradas alusiones a la división competencial entre la inmigración, que corresponde al Estado, y a la atención a los menores, que está en manos de las autonomías, y aprovecha esa circunstancia para arrogarse la capacidad de distribuir por toda



Imagen de la reunión de ayer, con el ministro Ángel Víctor Torres en el centro de la mesa

Junts rechaza el cambio de la Ley y el PP marca distancias por las formas del Gobierno

España a los jóvenes no acompañados que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla sin hacer referencia a la financiación. Los populares habían puesto la condición de que se les diera un fondo de contingencia ya que un menor supone a las comunidades unos 200 euros al día.

El debate sobre los recursos, que ha puesto el PP encima de la mesa, parece obviado por el Gobierno, a la vista del borrador de la reforma de la Ley de Extranjería que ha diseñado (se ha hecho como propo-



11 Julio, 2024



sición de ley para evitar asumir la autoría en primera línea ya que puede perder una nueva votación). La reforma de la Ley de Extranjería que plantea Moncloa regula el umbral a partir del cual se considera a Canarias, Ceuta y Melilla sobreocupadas (cuando el número de menores sea al menos un 150 por ciento de las plazas disponibles) y señala que si quedan los tres territorios declarados en situación de «contingencia migratoria extraordinaria», será «el órgano competente de la Adminis-

tración General del Estado» (es decir, el Gobierno) el que decida «cuál debe ser la comunidad autónoma a la que se traslade para su ubicación» a los menores migrantes.

El PP evita aún definir su posición, aunque ya hay consejeros, como Ana Dávila (Comunidad de Madrid), que critican la reforma de la Ley de Extranjería por «imposición» del Gobierno y advierten de que puede ser «inconstitucional» por invadir competencias autonómicas.

Junts, muy duro, ya ha advertido de que va a rechazar ese cambio legislativo si Cataluña no queda excluida. Míriam Nogueras asegura que se van a plantar ya que Junts no puede votar a favor de una ley que «aún más tensiona» Cataluña. El conseller de la Generalitat Carles Campuzano (ERC) se muestra mucho más comedido, aunque advierte que el Govern no puede «avalarla» en los «términos» en los que la presenta el Gobierno.

El PSOE acusó al PP de «falta de humanidad» por posponer su de-



11 Julio, 2024



Delegados alzan sus tarjetas de voto durante una conferencia del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), en Essen, el pasado junio. FABIAN STRAUCH / EFE

Un tercer grupo ultra para la UE

● Alternativa por Alemania forma junto a otros siete partidos la facción Europa de las Naciones Soberanas para coordinarse en la Eurocámara ● Disputa el espacio a los alineados con Orbán y a los socios de Meloni

MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS
 Nace un nuevo grupo ultraderechista en la Eurocámara: Europa de las Naciones Soberanas, que echa a rodar encabezado por Alternativa por Alemania (AfD). Lo hace cuando apenas han pasado 48 horas desde la formación de los Patriotas por Europa de Viktor Orbán. A sus filas se unen 25 eurodiputados de ocho países, pero tras muchos rumores no se suman los tres eurodiputados de Se Acabó la Fiesta (SAF) del agitador Luis Alvisé Pérez.

«Tras unas consultas intensas, hemos fundado el grupo Europa de las Naciones Soberanas. Compartimos el objetivo de tener un impacto significativo para modelar el futuro político de Europa a través de acciones decisivas y estratégicas. Esto solo puede lograrse si actuamos colectivamente, como la historia europea demuestra. La influencia siempre la han ejercido quienes tuvieron el coraje de organizarse y actuar estratégicamente», afirman en un escueto comunicado emitido tras el fin del encuentro. Y añade: «Elegimos este camino no porque sea fácil, sino porque es necesario hacer realidad nues-

tra visión compartida de una Europa de las Patrias fuerte, unida y con visión de futuro».

La sorpresa ha sido la marcha atrás del partido encabezado por Alvisé, que aunque no estuvo presente en la reunión constituyente, sí habría mantenido negociaciones. Durante el encuentro, que se prolongó durante algo menos de tres horas en una de las salas del Parlamento Europeo, el diputado húngaro Torozkai Laszlo avanzó que SAF sí formaba parte del nuevo grupo incorporándolo incluso en un mapa. Por lo pronto, estos tres eurodiputados se encuadran entre los no inscritos, escenario que desluce la visibilidad y los fondos percibidos. No obstante, cualquier europarlamentario puede sumarse, cambiar o salir de familia europea durante toda la legislación.

La nueva formación sale adelante tras lograr la adhesión de al menos 23 eurodiputados procedentes de siete Estados miembros, como marca el código de la Eurocámara. Muchos de los cuales son los partidos más radicales de sus países. A los 14 eurodiputados de Alternativa



Alice Weidel y Tino Chrupalla, colideres de AfD. F. STRAUCH / EFE

para Alemania se unen 3 —de los 6— representantes del polaco Confederacia; el búlgaro Revival (3); el checo SPD (1); el lituano Unión del Pueblo y la Justicia (1); el francés Reconquista de Eric Zemmour (1); el eslovaco Republika (1); y el húngaro Nuestra

Patria (1). Es decir, cuenta por lo pronto con 25 eurodiputados procedentes de ocho países. La base de su programa se conocerá la próxima semana durante el Pleno de Estrasburgo.

Por su parte, la extrema derecha polaca se ha dividido por la incomo-

dad de compartir bancada con la ultraderecha germana. «Confirmo que no me uniré a una facción que cuenta con AfD. La actitud de este partido hacia el Nord Stream I y Nord Stream II y las declaraciones de algunos miembros del grupo, que son directamente contrarias al interés nacional polaco, no nos permiten generar confianza y una cooperación constructiva en un grupo político. Al mismo tiempo, declaro cooperar con todas las fuerzas europeas que quieren detener la federalización progresiva, la inmigración masiva y descontrolada y el Pacto Verde Europeo», adelantaba Anna Bryłka, una de sus eurodiputadas a través de X.

Compartir siglas en torno a una sola familia es desde hace años el gran reto, sueño y ambición frustrada de las heterogéneas fuerzas populistas y euroescépticas de la Unión Europea. Tras las elecciones europeas de junio, sus divisiones no solo se han consolidado, sino que han aumentado. Si durante la legislatura pasada estaban divididas en torno a los Conservadores y Reformistas (ECR) comandados por la italiana Giorgia Meloni y la familia de Ma-

**11 Julio, 2024**

rine Le Pen, Identidad y Democracia (ID), en la que la comienza ahora ya son tres: ECR (78), Patriotas por Europa (84) y la recién estrenada Europa de las Naciones Soberanas (25). Si todos ellos se hubieran unido habrían sumado 187 escaños, solo uno por debajo del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor de la cámara.

Una de las grandes incógnitas que dejaron las elecciones de junio era qué harían el Fidesz húngaro y el alemán AfD. El primero estaba huérfano tras su expulsión del Partido Popular Europeo, que no pudo soste-

La formación logra la adhesión de 25 diputados de ocho países

Finalmente no se unirán los tres eurodiputados de Se Acabó la Fiesta

ner más la deriva autoritaria de Orban. Ahora, el primer ministro húngaro ha creado Patriotas por Europa, que es ya la tercera fuerza más poderosa de la Eurocámara. El nacimiento del grupo se produjo escasos días después del polémico viaje del mandatario magiar al Kremlin. «Llamemos a las cosas por su nombre. Los Patriotas de Europa sirven a los intereses de Rusia. Ya sea consciente o inconscientemente. Y así amenazan la seguridad y la libertad de Europa», reaccionó el primer ministro Petr Fiala.

Ayer fue AfD quien despejó la X pendiente de la ecuación. El partido de ultraderecha germano fue expulsado en plena campaña electoral de los comicios europeos por Le Pen de ID después de que líder, Maximilian Krah, blanqueando a los criminales de guerras nazis. Tras amagar con unirse a otras familias y ser denostado, AfD ha creado su propia familia, la más ultraderechista de la cámara pero también la más minoritaria de las ocho existentes. El alemán René Aust y el polaco Stanislaw Tyszka serán los co-presidentes de la formación.

Por lo pronto, quedan 33 eurodiputados sin familia y todavía se espera algún baile de sillas en los próximos días. Pero el mapa que devuelve el nuevo Hemiciclo deja ya el Parlamento Europeo más a la derecha y el más fragmentado de su historia. La décima legislatura se anticipa como una de las más complicadas a la hora de tejer consensos para avanzar en la integración del bloque comunitario en un momento de auge de las fuerzas eurofobas. Y en una coyuntura global volátil en la que la UE debe hacer frente a enormes retos como las guerras de Ucrania y Gaza, el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la guerra comercial con China, la ampliación al Este o la pérdida de competitividad de las empresas comunitarias.



11 Julio, 2024

Crisis migratoria

Las comunidades aceptan acoger solo a 260 menores migrantes de Canarias

La reforma del reparto por ley sigue en el aire ante las discrepancias de las regiones

JOAQUÍN VERA
 Madrid

Todas las comunidades autónomas –a excepción de Catalunya, que se abstuvo– votaron ayer a favor de acoger de forma voluntaria a 260 menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, como se viene haciendo cada año desde el 2022. Una cifra que no responde, ni de lejos, a la situación de emergencia que se vive en el archipiélago, que, con casi 6.000 menores bajo su tutela, necesita reubicar en la Península al menos a 3.000 de ellos. Ante este parche para un modelo de redistribución solidario que ha fracasado, el Gobierno buscó ayer en la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el apoyo de todas las regiones para una reforma legislativa que convierta el sistema en obligatorio en caso de crisis migratoria. Y en este punto no hubo consenso entre las comunidades,



La reunión de consejeros autonómicos duró más de cuatro horas

RAMÓN DE LA ROCHA / EFE

El Gobierno canario necesita reubicar en la Península a 3.000 niños y adolescentes sin amparo familiar

por lo que la modificación de la ley de Extranjería, que iniciará este mes su trámite parlamentario, sigue en el aire.

La reunión arrancó a media tarde con un clima de tensión, después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular declinasen la invitación de visitar un centro de acogida de menores colapsado en Tenerife. Ante el desplante, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, retó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que acuda a uno de esos centros “para mirar a los ojos” a los niños que están allí. Las consejeras conservadoras que asistieron a la reunión mostraron su malestar con el Gobierno durante la reunión, advirtiendo que no tolerarían “ni la más mínima insinuación de insolidaridad” por parte de sus gobiernos autonómicos, según fuentes presentes.

Según el documento de distribución territorial, al que tuvo acceso *La Vanguardia*, se establece distribuir a 300 menores llegados a Canarias y 100 a Ceuta. Sin embargo, 40 de los primeros se quedarán en las islas, con la financiación correspondiente a esas plazas para cubrir los gastos generados, y 13 en la ciudad autó-

noma del mismo modo. Así, 260 ahora ubicados en Canarias y 87 en Ceuta deberán pasar a la Península. En el documento, Catalunya, que se abstuvo, encabezaba el reparto con 31 menores, seguida de Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid con 30 niños y adolescentes. Continúan el listado Cantabria (29), Galicia (26), Asturias (24) y la Comunidad Valenciana (23). El reparto lo cierra La Rioja con cuatro meno-

res. Los criterios por los que se estableció el reparto tienen que ver con la población, la renta per cápita o el reparto de las comunidades.

La conferencia sectorial tuvo más componente político que soluciones. El acuerdo alcanzado no servirá para taponar la herida. El reparto voluntario fue ideado en el 2022, cuando la presión migratoria que sufría España era mucho menor, como fruto de la reconciliación con Marruecos. Durante

dos años consecutivos, el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, logró que todas las comunidades asumieran la acogida de pequeñas cuotas de menores para aliviar la situación en Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, este modelo ha fracasado a todas luces, según denuncian consejeros del ramo de distinto signo político: los repartos no se han completado y, sobre todo, la situación migratoria ha cambiado

radicalmente: ahora El Hierro es la principal puerta de acceso a Europa.

Las cifras hablan por sí solas. En octubre del pasado año se acordó una distribución similar a la pactada ayer en una conferencia sectorial idéntica. Las comunidades rubricaron el traslado a la Península de 396 niños y adolescentes procedentes de Canarias y las ciudades autónomas. Nueve meses más tarde, solo se han materializado 67 de esos traslados a Andalucía (Partido Popular), Aragón (PP-Vox), Asturias (PSOE) y Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo). “El sistema ha fallado”, concluyen fuentes ministeriales.

Con este modelo fracasado, el Gobierno central y canario tienen todas sus esperanzas en la modificación de la ley de Extranjería, que, de llegar al *Boletín Oficial del Estado*, serviría para activar un mecanismo de traslado obligatorio en caso de que la comunidad supere el 150% de su capacidad.

El Partido Popular, que actuó en bloque, alertó al Gobierno de que la reforma puede ser inconstitucional

Este fue el punto que acaparó la mayor parte de la conferencia sectorial de ayer. Las comunidades del Partido Popular actuaron en bloque, recriminaron al Gobierno que les enviase tarde el borrador. Se comprometieron a estudiarlo, pero no trasladaron su postura. Algo que en todo caso recaerá en la bancada del Partido Popular en el Congreso, donde se debatirá la reforma.

Fuentes presentes en la reunión aseguran que una de las consejeras más contundentes fue la madrileña Ana Dávila, quien cargó contra “la inacción” del Gobierno de Sánchez, a quien culpó de “endorzar” a las autonomías “un reparto impuesto que no soluciona nada”. Dávila fue a más y avisó de que la propuesta “puede ser inconstitucional”. La consejera de Andalucía, Loles López, puso sobre la mesa la llegada a su comunidad de 454 menores “camuflados” como adultos, algo que ha hecho tensionar el sistema de protección. Por ello, criticó que mientras “Andalucía vuelve a mostrar su solidaridad, el Gobierno ha vuelto a hacer gala de su irresponsabilidad y falta de humanidad”.

Sánchez defiende el refuerzo del flanco sur de la OTAN

■ El objetivo prioritario de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN que ayer arrancó en Washington es reforzar su flanco sur, de especial importancia para España en lo que respecta al Magreb y el Sahel, en un contexto geopolítico de grave inestabilidad. Así lo resaltó el presidente del Gobierno a su llegada a la primera sesión de esta cita de la Alianza Atlántica que conmemora su 75º aniversario. Sánchez destacó “la necesidad de un mayor compromiso por

parte de la OTAN y de los aliados respecto al flanco sur”. Muchos elementos contribuyen a la inestabilidad de esta inmensa región, según advirtió: “Los efectos del cambio climático, el auge de dictaduras en detrimento de democracias en una parte muy importante para España como es el Sahel, está haciendo que la presencia rusa cada vez sea mayor, que haya una mayor presencia de organizaciones terroristas o de organizaciones criminales que trafi-

can con seres humanos y que están detrás en buena medida de los fenómenos migratorios irregulares que está sufriendo el Mediterráneo en estos últimos años”. “Es importante el mensaje que vamos a trasladar”, destacó, ante la aprobación de un plan de acción específico y el nombramiento de un representante de la OTAN para liderar el programa. Sánchez resaltó que este compromiso tiene el máximo “interés estratégico” para España. / J.C. Merino

Continúa en la página siguiente



Catalunya se descuelga del pacto y avisa que su capacidad de acogida tiene límites

Viene de la página anterior

Por su parte, el conseller en funciones de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, aseguró en Tenerife que el Gobierno central tiene que hacer las cosas “de forma ordenada y con financiación”. El Govern catalán se abstuvo en el pacto de acogida de menores inmigrantes.

Campuzano aseguró que Catalunya tiene voluntad de acogida y de ayudar a la sobreocupación en Canarias, pero advirtió al Gobierno de que ello “implica también no trasladar los problemas”.

Campuzano afirmó que el Gobierno central “no lo está haciendo bien”, y remarcó que Catalunya no puede apoyar la modificación de la ley de Extranjería en los términos que el Ejecutivo propone en la actualidad. Consideró que “si se resuelven cuestiones sobre financiación de la acogida y se afrontan los problemas de determinación de la edad por parte de la Fiscalía estaríamos en disposición de avalar la ley. Pero ahora no lo estamos”, dijo.

En este sentido, advirtió que la “sobreocupación no es solo problema de Canarias, Ceuta y Meli-

lla”, y subrayó que la reforma del artículo de la ley de Extranjería sería un parche que traslada problemas y responsabilidades a las comunidades autónomas que no tienen medios ni capacidades para afrontarlos.

El sistema de acogida de menores de Catalunya sufre también problemas de tensión debido a que no solo acoge a los menores derivados desde el Gobierno central procedente de zonas de tensión del sur de España. Además, la Generalitat presta ayuda a los menores más allá del límite legal, hasta los 23 años.●



El conseller en funciones de Drets Socials, Carles Campuzano

RAMÓN DE LA ROCHA / EFE



11 Julio, 2024



Un grupo de turistas paseaba por la Plaza Mayor el día 3. CLAUDIO ÁLVAREZ

La turistificación expulsa lejos del centro a la población que busca arraigo, coberturas sociales y redes comunitarias

Madrid, ante el riesgo de ser una ciudad excluyente

P. O. D.
Madrid

Muchos se van. Se va, por ejemplo, Ajo, ave nocturna y diurna madrileña, todo un icono de la cultura *underground* esculpido al ritmo de la capital y metamorfoseada en micropoetisa. Uno de esos frutos identitarios y genuinos de Madrid, que vivió 25 años con su perrita *Musa* en un piso pegado a la bonita plaza de las Comendadoras. Incluso montó un local próximo con sus socios, al que bautizaron La

Realidad, y por el que pasaban poetas, escritores, cantautores, artistas de todo pelaje, periodistas y toda clase de interesantes almas desviadas. Hasta que llegó un fondo de inversión y compró su edificio entero: "Mi casero, de 92 años, vendió todo el edificio a unos fondos y echó a todos los inquilinos. Yo llevaba 25 años. Pagaba 640 euros de alquiler. Lo arreglaron un poco y ahora lo tienen alquilado por 1.750 euros, un tercer piso sin ascensor", cuenta. "Y yo sigo sin casa desde entonces. Tres años ya. Es una

vergüenza. Yo ahora soy turisto-fóbica y busco casa por Galapagar o El Escorial", dice, y pone el dedo en la llaga, o en la herida por la que parece desangrarse la ciudad, que va perdiendo algunos de esos habitantes que la dotaban de vida propia.

A la luz de recientes estudios sociológicos sobre la ciudad elaborados por la exvicerrectora y profesora de Sociología de la Universidad Complutense (UCM) Margarita Barañano, los huecos de ese queso gruyere que van dejando los que se van los rellenan,

en buena medida, los extranjeros, ya sean potentados con visados dorados, como muchos venezolanos; o humildes migrantes que habitan en habitaciones y espacios inhóspitos y que son empleados en un sector servicios volcado en cubrir la enorme demanda turística de la ciudad: 10 millones de visitantes en 2023. Madrid corre el riesgo de convertirse en un parque temático, advierte Barañano, en el sentido de ser una ciudad cada vez más llena de atracciones de ocio pero, al mismo tiempo, más desprovista de vida genuina.

Mientras Málaga, Ibiza o Barcelona se alzan contra las consecuencias de la turistificación desmedida que ha hecho casi imposible la vida para malagueños, ibicencos, barceloneses y residentes en esas ciudades, el pasado miércoles, el castizo barrio de Chamberí clamaba por la que ha sido su escuela de música durante los últimos 28 años, La Popular, bajo el lema "La avaricia rompe el barrio". Varios centenares de vecinos suplicaban con carteles que no les quitaran la música, que no destruyeran el barrio, que siguiera la cultura para todos, mientras la sociedad inmobiliaria Promociones Algara Gómez, SL irrumpía a golpe de burofax y les daba a los inquilinos (4.000 euros al mes) hasta el pasado 1 de julio para abandonar el local.

Y se iba también de su estudio una joven familia boliviana, con dos niñas de tres y cinco años, también a golpe de burofax, porque los vecinos de un conjunto residencial en el que vivían han decidido ahora hacer valer la ley: "Es ilegal vivir en esos estudios porque no tienen cédula de habitabilidad", argumentan. Ahora, como tantos migrantes, han logrado alquilar una habitación para toda la familia en un piso compartido de Pozuelo de Alarcón.

Cada día es más común que jóvenes *intrépidos*, con idea de formar una familia, se asienten lejos de sus progenitores y de sus raíces, que también son su propia red, porque no pueden asumir los precios de la vivienda en sus barrios de origen, donde muchas

El dato

4.514 euros

Es el precio del metro cuadrado de vivienda usada. El último informe del portal inmobiliario Idealista avanzaba el dato del precio de los pisos de segundo mano, que se ha convertido en un nuevo récord la pasada semana.

veces se han perdido los servicios sociales y vecinales que los dotaban de bienestar para la crianza, provocando una "crisis de cuidados".

Puente de Vallecas y Carabanchel son los barrios que más han crecido por este motivo, según los datos del padrón de 2023, cuando Madrid superó por primera vez los 3,4 millones de habitantes. Los extranjeros que residen en la capital representan ya un 28,8% del total de los habitantes de la ciudad de Madrid, llegando casi al millón de personas (995.088, según los mismos datos), de los que el 81% tiene nacionalidad española.

"Madrid sigue siendo, como otras ciudades globales, una gran atractora de personas migrantes extranjeras, y esta tendencia no solo no ha desaparecido, sino que se ha reforzado", explica. Y aporta un dato: "En 2023 llegaron 127.000 extranjeros a la capital, principalmente procedentes de Colombia, Venezuela, Perú y Argentina, países de origen que suponen más del 51% del total". La vivienda —récord histórico la pasada semana: 4.514 euros el metro cuadrado de vivienda usada en la capital, según el último informe de Idealista de junio— se ha convertido en factor clave de la expulsión: ha pasado de ser un derecho humano básico a un bien sujeto al mercado libre. Se ha disparado hasta niveles imposibles con dos fenómenos globales: la gentrificación y la turistificación. La consecuencia es que "el mercado nos manda al quinto pino, nos expulsa" de la ciudad, dice Barañano.



11 Julio, 2024

SECUELA POLÍTICA DE LA CRISIS MIGRATORIA

Vox da por rotos los pactos con el PP por el reparto de inmigrantes

Abascal rechaza la distribución de menores migrantes que ha asumido Núñez Feijóo y hoy decidirá su salida de los gobiernos autonómicos



11 Julio, 2024

Crisis migratoria

La dirección de Vox anuncia la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP

El partido ultranacionalista se aleja de Feijóo por la acogida de niños inmigrantes

REDACCIÓN Barcelona

Vox ha anunciado que hoy reunirá a su dirección con el objeto de debatir la ruptura de las coaliciones de gobierno que comparte con el Partido Popular una vez que estas comunidades aceptaron el reparto de 260 menores entre todos los gobiernos regionales para aliviar la difícil situación que atraviesan Canarias y, en menor medida, Ceuta y Melilla.

Del comunicado que acompañaba el anuncio del partido que preside Santiago Abascal se desprende que la decisión de romper con el PP en los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Baleares –donde Vox no forma parte del Ejecutivo, pero sí le presta apoyo– está ya tomada.

Vox acusa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “romper los pactos de gobierno” en las cinco autonomías al “haber obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto de 400 menores”. “Tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar” añade.

Para el partido de Abascal, es Feijóo el que ha roto los gobiernos de coalición que comparten, mientras que Vox “cumple con su palabra y su compromiso con los españoles”.

El alcance de esta decisión es difícil de prever toda vez que ahora está por ver qué posiciones adoptarán los representantes del partido ultranacionalista en cada uno de estos territorios donde la ruptura implica la pérdida de sustanciosos salarios y también parcelas de poder que Vox, por sí mismo, jamás habría alcanzado.



El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco

NACHO GALLEGU/EFE

Ninguna alusión a los menores en los pactos de gobierno

■ El Partido Popular y Vox comparten gobierno en cinco de las 13 comunidades y ciudades autónomas que presiden. Estos gobiernos, con la salvedad del de Castilla y León, que, de hecho, fue el precursor de los pactos de los populares con los ultranacionalistas, son el fruto de las últimas elecciones autonómicas, cuando los socialistas perdieron la presidencia de Baleares, Extremadura, Valencia y Aragón. En los tres últimos, Vox forma

parte del Gobierno de la comunidad y, en Baleares, la formación de extrema derecha le apoya desde fuera del Ejecutivo. En ninguno de los acuerdos firmados para la constitución de estos cinco gobiernos hay una alusión expresa a los menores inmigrantes en la que se determina que no se les dará acogida. En realidad, por ejemplo en Baleares, en el acuerdo firmado entre la representante de Vox y el del PP, el futuro gobierno se compro-

metía a mejorar, de forma genérica, la política dedicada a los menores y brindar el mayor apoyo a “aquellos que se encuentran en situaciones especiales”. En suma, con la lectura de estos pactos, el partido ultranacionalista no puede acusar a los populares de estar incumpliendo los acuerdos que ellos mismos firmaron. Otra cosa, como sospechan en el PP, es que Vox esté tratando de abrir una brecha con el partido de Feijóo.

No sería la primera vez que los líderes territoriales del partido de Abascal desobedecen las órdenes de la dirección.

En cualquier caso, era evidente desde hacía algunas semanas que Vox había entrado en ruta de colisión con el Partido Popular.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo no quiso ceder al “chantaje”, en palabras de su portavoz, Borja Semper, y desde hace días la dirección del partido advertía al grupo de Abascal que no iba a cambiar de opinión en la cuestión de los menores, más aún teniendo en cuenta que el PP gobierna también en Canarias, donde la situación es ya insostenible.

Ayer, antes de que se diera a conocer la nota de Vox, la mayoría de los presidentes autonómicos que se verían afectados por esta ruptura hacían de tripas corazón. El presidente de Castilla y

PP y Vox llevan algunas semanas en ruta de colisión, y la crisis de los menores es el argumento perfecto

León, Alfonso Fernández Mañueco –que fue el primer presidente del Partido Popular que incorporó a Vox en un Gobierno regional– decía que “los órdagos, para el mus” cuando se le preguntaba sobre la amenaza de ruptura.

El presidente Jorge Azcón, desde Aragón, también utilizó la metáfora del mus, relativizando la amenaza y dispuesto también a gobernar en solitario. En la misma línea se pronunció el presidente valenciano, Carlos Mazón: “Estoy bastante tranquilo con la estabilidad del Ejecutivo, cualquier otra cosa sería una sorpresa”.

En general, los barones populares consideraban que una ruptura no sería traumática. Los presupuestos están aprobados, por lo que pueden gobernar sin problemas. La definición de alianzas alternativas, de socialistas y Vox, no parece viable. A los barones del PP, gobernar en solitario no les asusta.●



11 Julio, 2024

Escalada en Oriente Medio 

Israel pide por primera vez la evacuación de la urbe de Gaza

► Las FDI avisan de fuertes combates tras el bombardeo a una escuela en Jan Yunis en la murieron 29 civiles

Maya Siminovich. TEL AVIV

«La ciudad de Gaza será una peligrosa zona de combate», advierten los folletos que el Ejército israelí lanzó ayer por la mañana sobre la ciudad. Y señalan en un mapa cómo llegar a la zona segura que recomiendan, Dir el Balah, al sur. En los últimos días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían emitido advertencias de evacuación en varias zonas de la ciudad de Gaza mientras sus tropas llevaban a cabo operaciones en los barrios occidentales y meridionales, así como en el barrio oriental de Shejaiya. Esta última advertencia se refiere a toda la ciudad de Gaza. Es la primera vez que el Ejército israelí realiza un llamamiento así y es la quinta vez que las tropas entran en la ciudad desde el comienzo de la guerra, hace nueve meses. Unos 200.000 palestinos permanecen en el norte de Gaza, según estimaciones recientes de las Fuerzas de Defensa de Israel.

La solicitud se produce horas

después de un ataque aéreo israelí contra un campamento de tiendas de campaña que mató a más de dos docenas de personas ayer, y cuando se reanudaban las negociaciones para poner fin a los combates en Doha, las fuerzas israelíes continuaron su ofensiva en el norte y centro de Gaza. Hamás dijo que la renovada campaña israelí mató a más de 60 palestinos en el enclave el martes.

Según fuentes médicas palestinas, el ataque aéreo israelí alcanzó las tiendas de campaña de familias desplazadas frente a una escuela en la ciudad de Abasan, al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, matando al menos a 29 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.

El Ejército israelí dijo que estaba revisando los informes de que civiles habían resultado dañados. Afirmó que el incidente ocurrió cuando alcanzó con «munición de precisión» a un combatiente de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre contra Israel.

Ayer, las fuerzas de Israel profundizaron su incursión en dos distritos de la ciudad de Gaza. Los comunicados militares detallaban haber llevado a cabo registros casa por casa en algunas zonas.

Residentes de Gaza por su parte comunicaron en redes sociales que las fuerzas israelíes patrullaron la carretera principal hacia la costa, con francotiradores en los tejados de algunos edificios altos que aún



EUROPA PRESS

Las familias lloran la muerte de sus seres queridos en Jan Yunis

estaban en pie y tanques estacionados dentro de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Unrwa.

Hamás ha negado las afirmaciones de que utiliza escuelas, hospitales y otras instalaciones civiles con fines militares.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, dijo a las tropas que Israel está aplicando presión militar sobre Hamás de diferentes maneras en toda la Franja de Gaza y que de ninguna manera la estrategia militar está «haciendo aguas».

«Estamos aplicando presión militar de diversas formas. Lo que se está haciendo en Rafah es diferente de lo que se está haciendo aquí», dijo a los oficiales de la División 99 en la ciudad de Gaza. Frente a las críticas internas y externas de la

falta de objetivos concretos en el enclave palestino y las muestras de desánimo en muchos sectores militares, el jefe del Ejército trató de animar a las tropas al tiempo que mandaba un mensaje a quien no está convencido. «Lo que estáis haciendo aquí es diferente de lo que está sucediendo ahora en Shejaiya, o la misión del corredor [Netzarim] o el área de seguridad a lo largo de la frontera», dijo Halevi. «El denominador común entre lo que sucede en los diferentes lugares (...) es la determinación», añadió. No hay nada que se mantenga estancado o esté estancado. Estáis consiguiendo logros importantes todos los días», les animó. «Estamos planificando con anticipación (...) buscando oportunidades [para apuntar] a altos funcionarios, infraestructura y operativos, y lo

hacemos con todo tipo de métodos», añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo en la Knéset (parlamento israelí) que el 60% de los terroristas de Hamás han muerto o están heridos a estas alturas. «Los logros de los soldados de las FDI son muchos. Matamos o herimos al 60% de los terroristas de Hamás», dijo Gallant en respuesta a una consulta presentada por un parlamentario del partido Stonismo Religioso, Ohad Tal, sobre la electricidad que Israel había reconectado a Gaza la semana pasada. El ministro de Defensa afirmó: «La legitimidad internacional que exige condiciones humanitarias es una condición básica para permitir el funcionamiento del Ejército». Reiteró, además, su compromiso de liberar a los rehenes.



11 Julio, 2024

Las comunidades del PP acogerán a los 400 menores inmigrantes

ANUNCIO/ Feijóo apunta que Vox no puede amagar con romper gobiernos regionales por “cumplir su deber”.

Expansión. Madrid

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebró ayer en Tenerife con un punto principal: la reforma de la ley de Extranjería para garantizar la acogida solidaria de los menores no acompañados que llegan a Canarias, en un ambiente marcado por el descontento, si bien todas las comunidades acabaron votando a favor del reparto con la única excepción de Cataluña, que se abstuvo. A primera hora de la tarde, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había despejado una de las principales incógnitas al confirmar que las comunidades gobernadas por su partido acogerían a los 400 menores que le correspondían por el reparto, pero no fue suficiente para tapar las contrariedades. Por ejemplo, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, sostuvo que el “problema de acogida de menores no acompañados no se soluciona haciendo un reparto y solo hablando de números sin ninguna otra medida”. También la consejera madrileña de Familia, Juventud y

Todas las CCAA apoyaron el reparto, de inmigrantes salvo Cataluña, que se abstuvo

Asuntos Sociales, Ana Dávila, criticó que el Gobierno “endose” a las CCAA “la crisis migratoria” con “un reparto que no soluciona nada”.

Sin embargo, todas las comunidades del PP acabaron votando a favor del acuerdo para aceptar el reparto de menores inmigrantes. Y eso, a pesar de la amenaza que viene realizando en las últimas jornadas Vox, socio en varias de estos gobiernos. A este respecto, Feijóo respondió que “no se puede amenazar a nadie por cumplir su deber”. Sin embargo, donde puede costar más el acuerdo es en torno a la reforma de la Ley de Extranjería que pretende establecer un modelo obligatorio de distribución de los menores una vez que los territorios saturados alcancen el 150% de su capacidad de acogida. En este sentido, el

presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que la comunidad “no puede aguantar más” la acogida en solitario de los menores.

Únicamente Cataluña evitó el respaldo al acuerdo, absteniéndose en la votación. Uno de los primeros en expresar sus dudas había sido su consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que aseveró que la acogida de los menores no acompañados tiene que hacerse “bien, de manera ordenada”, añadiendo que “el Govern de Catalunya no puede avalar” la modificación de la ley de Extranjería. Incluso dentro de los gobiernos más comprensivos hay peros. La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García, expresó su apoyo a la reforma, pero señaló que tiene que estar acompañado de financiación. Insistió en que se trata de un problema que debe asumir el Gobierno de España y Europa con la colaboración de las comunidades autónomas, aunque vio bien la opción de modificar la ley.